



Capital Social y Conflicto Armado: una indagación en diferentes municipios de Colombia sobre la resiliencia social ante la violencia

Rodrigo Carreño Barreto

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Ciencias Económicas
Bogotá D.C., Colombia
2016

Capital Social y Conflicto Armado: una indagación en diferentes municipios de Colombia sobre la resiliencia social ante la violencia

Rodrigo Carreño Barreto

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Magister en Ciencias Económicas

Director:

PhD. Juan Carlos montes Joya

Codirector:

PhD. Alejo Vargas Velásquez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Ciencias Económicas
Bogotá D.C., Colombia
2016

Resumen

Los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc nacen del reconocimiento de que la coerción ha fallado como estrategia para solucionar las condiciones que han fomentado la insurgencia durante los últimos 50 años. No obstante, en el estudio de conflictos internos, la viabilidad, duración e intensidad del conflicto son determinados por diferentes factores, dentro de los cuales se resalta la limitada institucionalidad como una condición que, bajo un deteriorado entorno socioeconómico, facilita la insurgencia. En este contexto, la violencia contra la población civil es una estrategia de control territorial usada por grupos armados ilegales para ejercer presión política y asegurar recursos. Sin embargo, la violencia también genera conductas pro-sociales, toda vez que la victimización puede fomentar la solidaridad. Entonces es posible hablar de resiliencia social, puesto que, aun cuando el conflicto destruye la confianza interpersonal y por las instituciones, la solidaridad refuerza las relaciones sociales, cuyo valor intrínseco se denomina de capital social. En este sentido, el objetivo de esta investigación es analizar el nivel de capital social y confianza institucional en 57 municipios de Colombia durante los periodos de recrudecimiento (1997-2005) y reacomodamiento (2005-2011), contrastándolos con índices de violencia asociados al conflicto. Finalmente, se propone un modelo de variables instrumentales que presenta evidencia significativa para argumentar que las poblaciones más afectadas por el conflicto presentan mayor nivel de capital social debido a la solidaridad. Sin embargo, el desarrollo de las instituciones y la evolución del conflicto amenazan el desarrollo de capital social.

Palabras clave: Capital Social, conflicto armado, violencia, solidaridad, Datos panel, Variables instrumentales.

Social Capital and Armed Conflict: an inquiry through different municipalities of Colombia on social resilience at violence

Abstract

The peace dialogues between the Colombian government and the FARC guerrillas are born from the recognition that coercion has failed as a strategy to solve the conditions that have fomented the insurgency during the last 50 years. Nonetheless, in the study of internal conflicts, the viability, duration and intensity of conflicts are determined by different factors among which, the limited institutionality is highlighted as a condition that, under a deteriorating socioeconomic environment, facilitates the insurgency. In this context, violence against the civilian population becomes a territorial control strategy used by illegal armed groups to exert political pressure and secure resources. Notwithstanding, violence also generates pro-social behavior, since victimization can foster solidarity. Thus, it is possible to speak of social resilience, since even when conflict destroys interpersonal trust and institutions, solidarity reinforces social relations, whose intrinsic value is called social capital. In this sense, the objective of this research is to analyze the level of social capital and institutional confidence in 57 municipalities of Colombia during the conflict periods of recrudescence (1997-2005) and rearrangement (2005-2011), and contrasting them with conflict-related violence rates. Finally, I propose a model of instrumental variables that presents significant evidence to argue that the populations most affected by the conflict have a higher level of social capital due to solidarity. However, the development of institutions and the evolution of the conflict threaten the development of social capital.

Keywords: Social Capital, Armed Conflict, Violence, Solidarity, Panel Data, Instrumental Variables.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. MARCO TEÓRICO	3
2.1 CAPITAL SOCIAL.....	3
2.2 CAPITAL SOCIAL Y CONFLICTO INTERNO.....	5
2.3 CONFLICTO INTERNO E INSTITUCIONES	11
2.4 CONFLICTO EN COLOMBIA	19
3. CONFLICTO ARMADO EN ALGUNAS REGIONES DE COLOMBIA.....	23
3.1 NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER.....	23
3.2 ARAUCA Y CASANARE.....	25
3.3 META, CAQUETÁ Y PUTUMAYO	27
3.4 ANTIOQUIA	30
3.5 EJE CAFETERO	33
3.6 BOYACÁ	34
3.7 PACIFICO (CHOCO, CAUCA Y NARIÑO).....	37
4. OBJETIVOS	41
5. METODOLOGÍA	43
5.1 DATOS.....	45
6. RESULTADOS	51
7. CONCLUSIONES	55
8. BIBLIOGRAFÍA.....	61
9. ANEXOS.....	67

1. Introducción

Capital social es el término que se acuña para reconocer el valor intrínseco del entramado social producto de la cooperación de los individuos, quienes comparten recursos y servicios en aras de lograr sus metas particulares. De manera general se entiende que el capital social se manifiesta en comportamientos que expresan la cohesión social y la eficacia colectiva, toda vez que la interacción es una necesidad de los seres humanos, en la medida en que las relaciones sociales no solo satisfacen la necesidad de pertenecer a un grupo, al mismo tiempo facilitan el acceso a recursos y la distribución de tareas. En la reiteración de estos comportamientos se establecen las normas que son aceptables para una comunidad, se estrecha la relación social, se facilita las acciones entre individuos y organizaciones, y se fortalecen elementos como la confianza interpersonal, las normas de reciprocidad y la asociatividad.

En este sentido, el Capital Social resulta particular en cuanto a su naturaleza social, ya que solo perceptible en su uso; siendo así, la inversión en un bien inmaterial como es el capital social, solo es posible través de una estructura que sostenga y fomente la interacción entre individuos, porque si bien la confianza, reciprocidad y asociatividad; son elementos que tienen la cualidad de ser acumulativos y autorreforzados, este proceso se ve fortalecido con la participación proactiva de las instituciones que intervienen ya que afectan positivamente la acumulación de capital social. Por ende, es necesario destacar el papel de las instituciones para reducir la incertidumbre y facilitar la cohesión social, especialmente en situaciones donde los intereses de grupos heterogéneos pueden llevar a conflictos.

No obstante, existe un fenómeno que fragmenta las relaciones sociales en todos los ámbitos, devasta la confianza entre los individuos, socava las instituciones, genera inestabilidad política y marchita las relaciones interpersonales: la guerra. Pese a las diferentes particularidades con que este fenómeno se presenta, los diferentes estudios que se han realizado en torno a los factores determinantes de los conflictos internos, coinciden en resaltar el papel de la debilidad institucional como un factor que facilita la existencia de grupos insurgentes. Este trabajo contribuye analizando como la violencia puede ser un incentivo para los individuos y sociedad, que incita a tomar medidas para mejorar la

seguridad y los problemas socioeconómicos que fomentan el conflicto, entonces, los actos de violencia tienen el efecto secundario de avivar la solidaridad.

Esta situación es relevante en el contexto actual que atraviesa el país por cuenta del proceso de paz, cuando se ha establecido el dialogo por encima de la coerción como solución a los problemas socioeconómicos que incitan a la insurgencia. En este sentido, es importante considerar la experiencia que han dejado diferentes conflictos internos a nivel mundial, pero particularmente la historia de la violencia en Colombia, como el conflicto que protagonizaron en el siglo decimonónico y luego en los cincuenta, liberales y conservadores; en el cual se evidencia como, si al terminar el conflicto persiste esa debilidad institucional y no se solucionan satisfactoriamente los problemas socioeconómicos, permanece el riesgo de revivir las confrontaciones de orden político y social, y de facilitar la formación de grupos armados, todo lo cual amenaza la promesa de una paz sólida y duradera. Entonces, es pertinente encontrar una herramienta de cooperación e integración de la sociedad civil, que a su vez marque el proceso de reconciliación con la institucionalidad.

En este sentido, el propósito de este proyecto de investigación es analizar la relación entre las variables de Capital Social y Conflicto, utilizando la Confianza Institucional como variable instrumental, con el propósito de determinar como el desarrollo del capital social de la población civil es afectado dentro del conflicto armado colombiano. En consecuencia, este proyecto de investigación apunta a describir el proceso de construcción de capital social durante el conflicto colombiano, y la viabilidad de reconstrucción del tejido social; toda vez que la violencia despierta solidaridad, pero esta únicamente se refleja en el capital social cuando existen los mecanismos institucionales apropiados. Si el auge de la solidaridad en medio del conflicto permite la articulación social en aras de solucionar los problemas socioeconómicos y de seguridad, entonces es posible hablar de la resiliencia del tejido social mediante la reconstrucción del capital social.

2. Marco teórico

2.1 Capital Social

Como ya se mencionó, capital social es una característica de los grupos sociales que se forma cuando los individuos cooperan para lograr sus metas o compartir recursos y servicios. Es según “aquel que resulta y existe en las relaciones entre personas y de estas con las instituciones de una sociedad” (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013, pág. 3). Aun cuando existen diversas interpretaciones, de manera general se entiende que el capital social nace de comportamientos que expresan la cohesión social y efectividad colectiva. O en términos de Adler (2002), capital social es la voluntad que los individuos aportan, lo cual incluye una serie de cualidades que surgen de las interacciones sociales: obligaciones y expectativas, canales de información y normas sociales. En este sentido, en la medida en que existan redes sociales estructuradas, orientadas a objetivos comunes, existirá compromiso, reciprocidad, y como consecuencia de estos, confianza. Estos elementos se refuerzan mutuamente a medida que se reiteran las interacciones y se incorpora el éxito de contribuciones anteriores, de esta manera puede avanzar hasta el nivel de redes de coordinación y cooperación (Putnam, 1993). Es esta condición de reforzamiento, a través de la interacción social, lo que hace pertinente el termino de capital social, puesto que al igual que otras formas de capital, tiene las cualidades de ser almacenado, ofrecer un beneficio común y requerir inversión (Hanifan, 1916).

En general, se entiende que el termino capital social busca destacar el efecto positivo que tienen las redes sociales y que no es captado en otras formas de capital (económico, humano, cultural, financiero, etc.). Aun cuando es una expresión utilizada vagamente desde mitad del siglo XIX (Portes, 1998), y definida por primera vez hace casi 100 años por Hanifan (1916). El concepto capital social se ha retomado con interés desde la década de los noventa, gracias a los trabajos de Coleman (1988) y Putnam (1993). Pero, mientras que el primero define capital social de una manera neutral, como una característica de las sociedades, que intermedia la construcción de capital humano; el segundo lo posiciona como un factor positivo que es generador de compromiso cívico. Por esta última razón, es posible ligar el termino de capital social con “la promoción y el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil” (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). En este sentido, el término también ha sido vinculado a la acción colectiva, en la medida en que ésta solo es

posible cuando existe un interés común entre diferentes actores. Entonces, se puede concluir que el capital social es un factor decisivo al momento de facilitar el consenso en un grupo (Arefi, 2003).

De esta forma, la inversión en capital social es particular, el intercambio es incierto y poco transparente, toda vez que, las transacciones de capital social se vinculan a obligaciones no especificadas en tiempos ciertos, luego es fuerte el riesgo de una violación a las normas de reciprocidad. Sin embargo, el beneficio obtenido de la inversión en capital social es similar a cualquier otra forma de capital, pues permite el acceso a recursos económicos o culturales. En general, las tempranas teorías de capital social destacan los diferentes accesos a oportunidades en distintos grupos a través de las conexiones sociales (Portes, 1998).

En este último punto es necesario destacar que las redes sociales se construyen alrededor de los intereses individuales, es decir que son construidas por la convergencia de estrategias que los individuos adoptan según sus motivaciones personales (Portes, 1998). El trabajo de Portes analiza dos tipos de motivaciones que llevan a la formación de redes y por lo tanto son fuente de capital social. Motivaciones consumatorias, son aquellas que traen un beneficio en general a la comunidad a través de las redes sociales y por lo tanto traen un valor de introyección, es decir que son conductas que los miembros de un grupo adoptan a fin de generar un beneficio general, por ejemplo: inhibir el crimen permite a los individuos gozar de seguridad sin temor. Por otro lado, dentro de las motivaciones consumatorias se puede distinguir la disposición del grupo en sí, es decir, el surgimiento de una solidaridad limitada a la comunidad, por ejemplo, un militar que se enfrenta voluntariamente situaciones que amenazan su vida en pro de la defensa de su nación, o el caso de personas adineradas que adquieren conductas filantrópicas en beneficio de hospitales y escuelas. De manera general, Portes (1998) reúne la solidaridad limitada y el valor de introyección como fuentes de capital social que llevan a la creación de un beneficio a través de las redes, y a su vez generan normas de observancia que desarrollan una forma de solidaridad social.

Por otro lado, una serie de teorías económicas explican las estrategias de interacción de los individuos desde una perspectiva egoísta, por lo tanto, las relaciones sociales se desarrollan toda vez que existe la intención de un beneficio directo y particular (Axelrod, 1984). Este tipo de motivación requiere de normas de reciprocidad, en la medida en que un individuo permite a otros el acceso a sus recursos o información en espera de un beneficio

futuro. Esta motivación denominada instrumental (Portes, 1998), difiere de una transacción de mercado en cuanto las obligaciones pueden ser pagadas de diferentes maneras a como fueron adquiridas, y pueden ser tan intangibles como el sentimiento de aprobación o lealtad. Sin embargo, desde una perspectiva instrumental, los individuos pueden esperar un pago futuro no fundamentado en la reciprocidad. En su lugar, es la estructura social quien garantiza la retribución, ya sea mediante la concesión de estatus, honor o aprobación; o al actuar como garante de que la obligación será pagada ejerciendo algún tipo de sanción social.

No obstante, cuando a la luz de estas teorías se analiza el desarrollo del conflicto armado en Colombia, el debate gira en torno al interés que comparten los grupos enfrentados. Desde la perspectiva de los grupos guerrilleros, se ha justificado la subversión como una respuesta a las condiciones socioeconómicas, como lo son los índices de pobreza y desigualdad, de manera que, los grupos guerrilleros deberían estar configurados en torno a un carácter político de izquierda. De igual manera, los grupos paramilitares, que nacen como respuesta a la violencia guerrillera, deberían mostrar una configuración coherente con políticas de derecha. Sin embargo, las teorías que analizan el conflicto exclusivamente desde una perspectiva socioeconómica resultan ser ineficientes para explicar la complejidad de un problema que se ha extendido por más de 50 años.

2.2 Capital social y conflicto interno

Como bien lo dicen Collier y Hoeffler (2007), “la rebelión necesita tanto un motivo como una oportunidad”. El surgimiento de la violencia no solo obedece a la naturaleza de los grupos enfrentados, sino también a factores externos que hacen razonable la idea de alzarse en armas. Son variados los estudios que relacionan los recursos naturales disponibles como un factor determinante en la duración de los conflictos. El desarrollo del mercado de cocaína fue crucial en el financiamiento de la guerra para los grupos armados ilegales, pero otras industrias, como la ganadería, el petróleo, el aceite de palma y el oro, también entrarían a jugar un papel determinante en el desarrollo del control territorial de los grupos armados. De no ser por estos recursos, la guerrilla se vería obligada a financiarse principalmente por medio de secuestros y extorciones, lo que debilitaría su capacidad de control territorial y finalmente el alcance de sus ambiciones políticas. Por otro lado, el paramilitarismo en sus orígenes se hizo viable por el patrocinio de los narcotraficantes a cambio de protección, en

cuestión de tiempo, los grupos paramilitares asimilarían el proceso de producción de cocaína (Durán, Vásquez, & Loaiza, 2011).

De tal manera que, el aprovechamiento abusivo de las oportunidades económicas, el desarrollo de economías ilícitas a través de la explotación minera ilegal, la expropiación de tierras, los cultivos ilícitos, hacen cuestionable la naturaleza netamente política de los grupos armados ilegales, de forma tal que, incluso se llegó hasta enfrentamientos internos, como es el caso de la desaparición del grupo conocido como Bloque Metro a manos del Cacique Nutibara, dos facciones del paramilitarismo enfrentadas por desacuerdos incompatibles, la postura política del primero, versus el interés por el negocio de la cocaína del segundo. Estas posibilidades para la insurgencia se ven favorecidas por la poca capacidad del Estado para ejercer control dentro de su territorio lo que permite el desarrollo de mercados ilegales, de economías ilícitas. De esta forma, la motivación inherente de ciertos grupos armados puede ser exclusivamente la oportunidad económica que ofrece el conflicto, pero nos interesa su impacto en las instituciones y la latente relación entre capital social y conflicto

Por otro lado, más allá de las motivaciones particulares, como ya se ha mencionado, el capital social tiene el efecto de reducir la incertidumbre en las interacciones entre individuos, para lo cual se apoya en la estructura social. Sin embargo, en su análisis, Portes (1998) separa las relaciones de mercado como fuente de capital social, de esta manera soslaya su papel en las estrategias de interacción de los individuos. Incluso se ha argumentado que la expansión del dominio económico acaba con el capital social, pues altera la naturaleza de los lazos dentro de la comunidad (Adler, 2002). Esta teoría podría justificar la distorsión de las motivaciones políticas de los grupos armados ilegales, pero es ineficiente para explicar el conflicto en regiones con menor desigualdad socioeconómica (Rubio, 2002), o la falta de conflicto en regiones con abundancia de recursos naturales fácilmente explotables (saqueables en términos del trabajo de Collier y Hoeffler, 2007). Tal es el caso de las esmeraldas en varios municipios de Boyacá, en donde el surgimiento esporádico de olas de violencia llevó al desarrollo de acuerdos que han permitido una explotación minera con un relativo orden social, e incluso la legitimización de varios esmeralderos como empresarios (Gutierrez & Barón, 2008).

En cambio, al analizar la naturaleza de las relaciones entre individuos en lugar de sus motivaciones, Adler y Kwon (2002) encuentran que las estrategias comunes exitosas y reiteradas llegan a construir normas, confianza y reciprocidad. Adler parte de las relaciones

sociales simples, que se dan entre individuos en busca de compartir recursos, servicios e información, y pese a que los términos de la transacción no se especifican, la expectativa de una retribución equivalente en el futuro crea una transacción simétrica. En este mismo contexto, las relaciones dentro de un grupo homogéneo pueden estar definidas por una estructura jerárquica, en cuyo caso la transacción es en términos de obediencia hacia una autoridad a cambio de seguridad material o espiritual. En este caso, las instituciones formales adquieren un rol más importante en la creación de confianza, pues se vuelven garantes de la estructura social mediante la capacidad de sancionar conductas fuera de las normas por medio de una figura de autoridad. Finalmente, las relaciones de mercado se apoyan tanto en la necesidad de compartir recursos y servicios como en el establecimiento de instituciones formales, para establecer una medida clara de las transacciones y reducir la incertidumbre. En este sentido, aun cuando las relaciones interpersonales se diferencian claramente en su naturaleza, todas ellas contribuyen a la creación de capital social, pues son estrategias exitosas para los intereses individuales, de cuya reiteración se construyen normas y confianza, como afirman Adler y Kwon, quienes agregan que hay capital social en las estructuras jerárquicas formales al interior de grupos homogéneos, este es un mecanismo formal que alinea los intereses individuales en pro del grupo; esta es una forma de adoctrinamiento que es adoptada tanto por el Estado, como por los grupos guerrilleros y paramilitares.

Pese a que el trabajo de Adler y Kwon (2002) se centra en la teoría organizacional, y a su vez soslaya las interacciones entre grupos heterogéneos, este es importante para determinar factores que influyen en la eficiencia de los grupos y su configuración. Los autores comienzan describiendo como la complejidad de una tarea determinada puede afectar seriamente la estructura de un grupo, por lo tanto, objetivos poco específicos crean preferencias por grupos cerrados para aumentar la voluntad de los actores para compartir información; mientras que, objetivos más específicos generan preferencias por grupos grandes, donde se amplía la posibilidad de acceso a recursos. A este fenómeno lo denominan “contingencias de la tarea”.

Cuando la tarea es la insurgencia, el desarrollo de mercados ilegales, o la protección, el control territorial se vuelve una prioridad. Este fenómeno se ve reflejado en la cooperación existente entre grupos guerrilleros, pero se hizo más evidente con el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas en 1997 a partir de la unión de grupos paramilitares regionales no solo con el propósito de compartir información y recursos, sino

de organizar las actividades paramilitares detrás de un proyecto político (Montenegro, 2013). La efectividad de esta organización se ve reflejada en el auge del paramilitarismo entre 1997 y 2006.

No obstante, el trasfondo de la expansión paramilitar no es una respuesta a la insurgencia guerrillera. Durante el periodo 1997-2002 del total de municipios donde se encuentran grupos paramilitares, solo el 18% cuentan con presencia guerrillera (Montenegro, 2013). Por el contrario, se ha argumentado que las acciones de los grupos paramilitares se orientan a desarrollar corredores para el narcotráfico, la expansión de esta estrategia por el control territorial se evidencia en que la mayoría de los enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas se desarrollaron en territorios estratégicos del narcotráfico. Consecuentes con sus estrategias de control territorial, el incremento sustancial de las tácticas de terror se evidencia en el incremento de asesinatos y masacres, que para 2001 alcanzaron su mayor nivel histórico.

Por otro lado, Adler y kwon (2002) describen las contingencias simbólicas como la afinidad entre las normas y valores de un subgrupo o un individuo y su contexto; pues, la incompatibilidad entre ellos afecta las relaciones entre grupos heterogéneos. Esta teoría podría explicar porque se desarrolló un proyecto que agrupaba a todos los grupos paramilitares dentro de la figura de las AUC, mientras que no existía una agrupación que reuniera las propuestas guerrilleras, solo casos de cooperación aislados. Las diferencias políticas más acentuadas en los grupos guerrilleros, pueden ser evidencia de un componente político más significativo. No obstante, es importante destacar que la limitada cooperación entre guerrillas puede también deberse a otros factores, como su tamaño y dispersión en el territorio nacional, o el control territorial que ejercen.

Finalmente, Adler y kwon refieren las habilidades complementarias o las cualidades únicas de un grupo, que generan lazos sociales en la medida en que sean un recurso escaso, al cual otros busquen acceso. No son pocos los individuos que sobresalen en el conflicto colombiano, en cualquiera de los tres bandos enfrentados, las características individuales se transforman en liderazgo, un factor del que se deriva el capital social mediante el fortalecimiento de las estructuras jerárquicas. De manera tal que, a la luz del trabajo de Adler y Kwon (2002) tanto las contingencias de la tarea, contingencias simbólicas y habilidades complementarias son factores que afectan la dinámica del capital social, por tanto moldean la estructura social en la medida en que los individuos busquen el mejor beneficio de sus redes sociales y, la estructura se inclina en torno a la especificidad de su

objetivo, la compatibilidad de sus valores con las normas establecidas, el acceso a recursos escasos, en este caso por la dificultad impuesta por el Estado para el desarrollo de las actividades ilegales.

Por otro lado, el estudio de Edwards y Foley (1998) resalta dos problemáticas en el estudio del capital social entre diferentes grupos: Primero, el capital social no se encuentra igualmente disponible para todos los actores, la geografía y el aislamiento social limitan las redes sociales de los individuos; Segundo, el valor de una fuente de capital social depende significativamente de las condiciones socioeconómicas. De esta manera se entiende que la dinámica de capital social es diversa según el ámbito del grupo social, y varía a nivel familiar, laboral, educativo y territorial (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). Cada uno de estos ámbitos presenta una problemática distinta y retos específicos.

Entonces, se entiende que el contexto social genera variabilidad en el acceso a recursos. Que existen consecuencias negativas para este tipo de agrupaciones, es decir efectos secundarios indeseados del capital social (Portes, 1998), primero, en la medida en que existe un beneficio reforzando los lazos sociales, se generan condiciones para discriminar el acceso de otros individuos. Dicho de otra forma, el excesivo control de ciertos grupos para facilitar las interacciones al interior de sus miembros, implícitamente restringe el acceso del público en general. Portes (1998) cita el caso de etnias en Nueva York, como descendientes de inmigrantes italianos, irlandeses y polacos que lograron un control estricto sobre ciertos recursos como las uniones de policías y cuerpos de bomberos; o el monopolio de los judíos en el mercado de joyas de Nueva York. Un segundo efecto negativo es el exceso de demandas en los miembros de un grupo, en cuyo caso el éxito individual se ve limitado por la asistencia mutua. Como bien lo describe Portes, tal es el caso de emprendedores comerciales que se ven acosados para proveer trabajo u ofrecer préstamos a sus allegados. De manera similar, un tercer efecto indeseado del capital social es la restricción de la libertad individual, puesto que un excesivo control social afecta las acciones de los demás individuos. Y finalmente, la baja de las normas de nivelación, en cuyo caso la cohesión de un grupo está determinada por experiencias comunes que son adversas a las convenciones comunes. Es decir que, las normas de nivelación operan para mantener a los individuos alineados, pues, el éxito individual socava las relaciones grupales.

En este sentido, no se puede negar que el capital social como característica de un grupo puede ser tan nocivo como las intenciones del grupo en sí, o como bien lo resume Portes, el capital social es un elemento que se encuentra aún en bandas criminales en la medida

en que, aun en contra de la sociedad en general, estas cuentan con una estructura de cooperación en la que desarrollan sus propias normas, solidaridad y confianza. Sin embargo, el capital social no es necesariamente una herramienta que fomente el conflicto. Varshney (2002) llega a esta conclusión al analizar el problema de la violencia étnica en la India (entre hindúes y musulmanes), y estudia la correlación entre la presencia de grupos interétnicos e intraétnicos, a los cuales denomina en referencia al trabajo de Putnam, puentes (Bridging) y uniones (Bonding), donde uniones son las relaciones entre grupos homogéneos, y puentes las relaciones entre grupos heterogéneos. Es importante destacar que, de haber estudiado solo regiones en conflicto, el análisis se habría limitado a grupos intraétnicos, en cuyo caso el capital social sería un factor decisivo en el fomento de la violencia. Sin embargo, al estudiar regiones con menores índices de violencia, Varshney encontró que la presencia de grupos interétnicos es propia de la paz, toda vez que las relaciones construidas como puentes facilitan la comunicación entre grupos heterogéneos, atenúa falsos rumores, y finalmente ayuda a la administración regional a desempeñar su trabajo en cuanto a la paz, la seguridad y la justicia.

Considerando que el propósito de este trabajo es analizar el capital social de la población civil partiendo de la asunción de que la paz y el orden constituyen el interés común de la población ajena a los grupos armados ilegales, es necesario resaltar dos elementos fundamentales del estudio de Varshney sobre la construcción de capital social, toda vez que el capital social es un medio para el desarrollo de las estrategias individuales (mas no un fin). Primero, centrar el estudio a un grupo y a las relaciones al interior de este no es concluyente respecto al papel de dicho grupo frente a la sociedad en general y la influencia de lo que ocurre a su alrededor, por esta razón este trabajo sugiere un estudio regional enfocado en la población civil. Segundo, la comunicación se apoya en la confianza, de manera que las instituciones formales e informales juegan un papel crucial para reducir la incertidumbre cuando se trata de las relaciones entre individuos y grupos. De modo que, el capital social de Colombia es afectado por el conflicto entre el Estado, grupos guerrilleros y paramilitares. Estos actos de violencia directa, como asesinatos y desplazamientos, destruyen las redes sociales. A la vez que, el control territorial de los grupos armados ilegales socava las instituciones estatales, dando paso a la corrupción y destruyendo la confianza institucional.

No obstante, a pesar del efecto negativo que el conflicto tiene sobre diferentes variables que componen el capital social, como reciprocidad y confianza interpersonal; Blattman y

Miguel (2011) describen una relación positiva entre conflicto y solidaridad. Si bien el efecto del conflicto en el corto plazo es claramente desastroso, existe evidencia mixta de como el impacto a largo plazo afecta el capital humano y la calidad de vida; Incluso, estudios sobre bombardeos en Vietnam evidencian una rápida recuperación de los estándares de vida previos al conflicto (Blattman & miguel, 2010). Estos hallazgos empíricos contradicen el modelo de *Poverty trap*; sin embargo, una creciente rama de estudios de acercamiento microeconómico encuentra un impacto negativo del conflicto en el capital humano (Blattman & miguel, 2010), en otras palabras, las personas afectadas por la guerra suelen tener desventajas en cuanto a su educación o nivel de productividad de manera persistente en el largo plazo. Pero, en la medida en que, durante el posconflicto, la sociedad regresa a un estado estable es una función de los determinantes de crecimiento donde las instituciones juegan un papel importante; e incluso existen evidencias empíricas que evidencia, de manera contra intuitiva, que la victimización incrementa la movilización política y la participación colectiva local

2.3 Conflicto Interno e Instituciones

La relación entre conflicto y capital social resulta ser compleja, puesto que los actos de violencia no solo destruyen las normas de comportamiento, la confianza y la asociatividad, a su vez la violencia también puede ser resultado de la carencia de esos vínculos de solidaridad y comunicación, lo cual constituye un perverso círculo vicioso. Diversos trabajos han buscado explicar los factores que incitan y fomentan la aparición de grupos armados al margen de la ley, y a pesar de buscar explicar el conflicto mediante una variedad de factores exógenos, gran parte de la discusión coincide en otorgarle un papel preponderante al peso específico de las instituciones estatales y su eficacia dentro del territorio.

Por ejemplo, el trabajo de Rubio (2002) identifica como causantes y promotores del conflicto colombiano una serie de factores socioeconómicos comunes en varios municipios del territorio nacional, entre los cuales se destaca la pobreza, la desigualdad, el número de habitantes por municipio y la edad promedio de la población (argumentando que una población joven y desempleada es más susceptible a vincularse a grupos armados ilegales), finalmente Rubio concluye en su estudio que “la pobreza no estimula el conflicto, pero la desigualdad sí”, que las condiciones frágiles de la infraestructura institucional a nivel municipal (de manera complementaria a las condiciones socioeconómicas) determinan la

presencia de grupos violentos. En este aspecto, se infiere una posible relación directa entre la presencia de grupos armados ilegales y la frágil infraestructura institucional formal. En cuyo caso, tanto el pobre desempeño de la justicia penal como la escasa estructura para comunicaciones con el entorno, se destacan como factores que fomentan la violencia; aun cuando esta correlación no muestra causalidad y está limitada a ciertos ámbitos territoriales, es evidencia de que el deterioro del capital social se encuentra directamente relacionado con el deterioro en las instituciones formales causado por el conflicto, y es un reflejo del papel que juega el Estado en la construcción y protección del capital social.

Ahora bien, dadas las anteriores consideraciones, es necesario destacar que, si bien estas son condiciones frecuentes en las regiones afectadas por el conflicto, no necesariamente son causa del mismo, toda vez que existen comunidades pobres y con altos niveles de desigualdad que no se ven igualmente afectadas por conflictos armados. De esta manera, diferentes autores concluyen que, las condiciones socioeconómicas por si mismas son insuficientes para explicar la aparición de la insurgencia, y por lo tanto es necesario explorar las condiciones exógenas que rodean estos grupos, particularmente se ha estudiado el fenómeno llamado "*Natural Resources Course*", en el cual, la abundancia de recursos naturales se asocia con un lento desempeño económico, autoritarismo y el empeoramiento de las condiciones de vida en general (Idrobo, Mejia, & Tribin, 2014).

En este sentido, el trabajo de Collier y Hoeffler (2007) se enfoca en la factibilidad de que se genere un actor armado privado, por la posibilidad de hacer sostenible económicamente a ese ejército particular, el cual es provisto por la disponibilidad recursos naturales. De esta manera, se destacan ciertos recursos que por sus características están estrechamente relacionados con los conflictos, particularmente, pero no exclusivamente, aquellos recursos que son "saqueables", es decir, de fácil acceso para los grupos ilegales. En su estudio, Ross (2004) parte del caso concreto de los diamantes, piedras preciosas y las drogas. No obstante, la relación de los recursos naturales con el conflicto puede variar de acuerdo a su naturaleza. Por ejemplo, en el caso de un recurso no saqueable como el petróleo, si los sediciosos quisieran financiarse a través de este, necesitarían un sistema nacional de producción y distribución, lo cual es prácticamente imposible (Montenegro, 2013). En general, la abundancia de recursos naturales, y la alta dependencia de una economía hacia estos, se asocia con baja capacidad institucional, a su vez responsable por un bajo desarrollo económico y altas desigualdades socioeconómicas (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2001).

Por otro lado, cuando se trata de las consecuencias del conflicto, el problema persistente es lo poco que se ha investigado en profundidad desde una perspectiva cuantitativa. Es importante tener en cuenta la dificultad de tan siquiera estimar el impacto del conflicto en la economía, principalmente porque este se relaciona con el debilitamiento de las instituciones, la destrucción de infraestructura y el deterioro de la capacidad administrativa (Gudmundsson, 2004). Sin embargo, es entendible el impacto que genera a nivel macroeconómico, toda vez que cae la inversión en todos los sectores de la economía dejando un impacto negativo en el largo plazo, al mismo tiempo que aumenta los niveles de inflación, empeora la balanza comercial, y aumenta el endeudamiento externo. Aunque paradójicamente los modelos de crecimiento exógeno concluyen que la destrucción de capital debería incrementar las tasas de acumulación, generando un impacto positivo en el crecimiento económico. Para el propósito de este trabajo, es importante considerar como la inseguridad asociada al conflicto causa una tendencia a la economía informal con baja productividad y retornos de corto plazo, ante la incertidumbre, los hogares tienden al consumo en lugar del ahorro y la inversión productiva. Al mismo tiempo, aumentan los costos de transacción debido a la inseguridad producto del frágil entorno legal, lo que debilita la inversión del sector privado (Sanchez & Diaz, 2005), entonces se crea inestabilidad en el entorno macroeconómico, a partir de la inseguridad y desconfianza en las instituciones.

Colombia parece ser una excepción a lo anterior, puesto que ha demostrado en los últimos años un buen crecimiento económico, que incluso es sobresaliente en comparación con el desempeño de la región. Desde la perspectiva de la “ecuación causal de Putnam” (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013), la formulación: sociedad fuerte – economía fuerte - sociedad fuerte – Estado fuerte, argumentaría que el mejor desempeño económico es por causa de una mejor articulación de la sociedad civil, las normas de reciprocidad y cooperación, toda vez que estos tres factores tienen un impacto positivo en la economía al reducir significativamente los costos de transacción. Pero un análisis más detallado del contexto colombiano muestra que en realidad la confianza ha sido dañada por la violencia y la ilegalidad atadas a instituciones afectadas por la corrupción y clientelismo. Entonces, es posible cuestionar la fortaleza del Estado, y aun cuando hay un buen crecimiento del PIB, Colombia dista de ser una economía fuerte. Por el contrario, el desempeño económico del país se desarrolla en torno a la informalidad, un campo fuertemente impactado por las actividades de grupos ilegales y el financiamiento de la guerra, que genera un efecto *spill-over* en los demás sectores de la economía.

En el posconflicto, los acercamientos tradicionales al desarrollo y las políticas de ayuda son insuficientes para atender al país afectado por la guerra, puesto que cada región enfrenta problemas internos específicos y particulares. Por lo tanto, desarrollar una solución a la medida se hace necesario. Puesto que “El conflicto no puede ser tratado como un factor exógeno, sino como un factor determinante del pobre desempeño económico, cuyas causas y consecuencias deben ser consideradas en todos los esfuerzos para mejorar el crecimiento económico” (Gudmundsson, 2004). Entonces, este trabajo sugiere establecer el impacto de la guerra en términos de destrucción de capital social e instituciones, puesto que estos factores son fundamentales para el desarrollo económico como bien lo afirma Gudmundsson, particularmente la confianza es un factor que implica un reto significativo debido a su deterioro por la violencia, y por lo tanto requiere de una gran inversión en capital social para ser restaurada (Fred-Mensah, 2004).

Sin embargo, cuando se estudia el caso de los conflictos externos, la evidencia histórica demuestra que la guerra permite el desarrollo de instituciones más eficaces (Blattman & Miguel, 2010), lo mismo puede ser cierto para conflictos internos. A pesar de que los conflictos internos se caracterizan por la poca institucionalidad, la guerra no necesariamente debe destruir las instituciones, por el contrario, puede ser un incentivo a los gobiernos para aumentar el control en las periferias, e incluso existe evidencia de guerras finalizadas por la victoria de un grupo que llevaron a la construcción de una paz más estable, y posiblemente, instituciones estatales más fuertes (Blattman & Miguel, 2010)

El principal problema derivado de la destrucción del capital social y la recuperación económica en el posconflicto se deriva de la posibilidad de proteger y reconstruir dicho capital social, toda vez que es posible fomentar la interacción social. De acuerdo a la definición de capital social sugerida, la construcción de capital social tiene dos elementos fundamentales: Primero, el capital social tiene la cualidad de ser auto-referenciado es decir que a medida que los individuos interactúan y forman redes sociales, fortalecen la confianza y demás normas que constituyen una estructura social, para así reforzar el capital social. Segundo, a través de las instituciones es posible la inversión en capital social, puesto que estas constituyen normas, confianza y seguridad, además de establecer una estructura que regula y facilita las interacciones interpersonales, de esta manera el Estado juega un papel importante en la construcción de capital social.

Como se ha mencionado anteriormente las condiciones socioeconómicas no son suficientes para causar un conflicto, pero se destaca como factor común el debilitamiento

de las instituciones tanto formales (asociadas al entorno político) como informales (asociadas a la sociedad civil). Es decir que, como bien lo describe Gudmundsson (2004), la ausencia de una definida estructura estatal es otro factor que contribuye al fomento del conflicto interno. En este sentido, la restauración de una clara estructura institucional dentro de todo el territorio colombiano es necesaria para la creación de capital social. Por lo tanto, este trabajo se desarrolla con el propósito de demostrar la hipótesis de que los niveles de violencia causada por el conflicto interno se relacionan con el capital social a través de la confianza institucional y el control indirecto del Estado.

Como bien lo describen Flores et al (2009), durante el conflicto, las políticas internas se asemejan más a la anarquía que a la jerarquía, lo que causa el “dilema de seguridad doméstica”, en donde no existe confianza ni compromiso entre las partes (población civil, excombatientes, organismos internacionales). En esta misma investigación, Flores et al se preguntan porque unos países logran recuperarse del conflicto más rápido que otros, para concluir que elementos como la confianza y el compromiso (elementos propios del capital social) permiten una mejor dinámica de las instituciones políticas, puesto que las partes involucradas perciben un mayor compromiso para alcanzar la paz.

Es necesario mencionar que, una clara estructura institucional es la base para la construcción de capital social, que la corrupción es un factor que contrarresta las funciones institucionales, toda vez que esta deteriora la confianza en las instituciones estatales, aun cuando la corrupción no es un fenómeno propio del conflicto, es importante mencionar como este fenómeno se ha mezclado con la violencia. Rubio (2002) describe una “peculiar simbiosis” entre los actores armados ilegales y los fondos públicos del país, para el 2002, Los grupos armados ilegales habían penetrado tan profundo los aspectos políticos de ciertos municipios que habían llegado a administrar los fondos públicos; esto, sumado a la capacidad de nombrar “funcionarios públicos y deducir un porcentaje de salarios y una cuota de contratos públicos”, generó un Clientelismo armado, que se ve aupado por la descentralización administrativa y la fragilidad del sistema de justicia local, lo que facilita el acceso de los grupos armados a los ingresos municipales. El estudio de Rubio concluye que entre mayores sean los fondos disponibles para un municipio, mayor es el riesgo de presencia de grupos armados. Por consiguiente, es posible concluir que una mayor inversión en la infraestructura de las instituciones debe conducir a fortalecer el sistema legal para contrarrestar el clientelismo armado.

Por otro lado, es importante considerar el papel de las instituciones militares en la protección y creación de capital social; toda vez que, el gasto en defensa es una necesidad pública, que todo gobierno debe planear para garantizar la seguridad. Aun cuando un gasto militar elevado es susceptible a corrupción y captura recursos necesarios en otros sectores, el riesgo de tener un gasto militar pequeño es exponer la seguridad, hacer aún más vulnerable los territorios apartados del país, y comprometer la estabilidad económica necesaria para resolver los problemas sociales. De manera que, determinar un gasto militar apropiado resulta ser un *trade-off* entre los beneficios de fortalecer las instituciones militares a costa de reducir el presupuesto en inversión social.

Diversos autores concuerdan en que el gasto militar no solo es infructuoso, sino que tiene un impacto negativo en el crecimiento económico al reducir la formación de capital productivo y distorsionar la distribución de recursos, por el contrario, reducir el gasto militar a través de acuerdos de paz puede mejorar significativamente el crecimiento económico facilitando la inversión en infraestructura, educación y salud (Gudmundsson, 2004).

El gasto en defensa puede afectar de tres maneras diferentes a la economía, primero, puede llevar a un *crowding-out effect*, al reducir la disponibilidad de recursos para inversión privada y el gasto público en sectores con impacto positivo en el crecimiento económico. Segundo, puede llevar a un efecto *spill-over* positivo al aumentar la demanda en torno a la industria militar y en otros sectores de la economía, sin embargo, este fenómeno es muy limitado en países de bajos o medianos ingresos donde se suele importar el armamento y no la industria militar no está desarrollada (Gudmundsson, 2004). Y tercero, como consecuencia de mejorar las condiciones de seguridad, se puede llegar a mejores niveles de ahorro e inversión.

Pese a los posibles efectos positivos del gasto militar, el trabajo de Gupta et al (Gudmundsson, 2004), que analiza la evolución de políticas macroeconómicas y fiscales durante el desarrollo de 22 conflictos internos, encuentra que niveles elevados del gasto en defensa tiende a generar inestabilidad macro económica principalmente por déficits en el presupuesto y su impacto en la inflación. Sin embargo, el conflicto en sí mismo tiene un impacto negativo directamente sobre el crecimiento económico, no solo por la desviación de recursos hacia la guerra, sino por la destrucción de distintas formas de capital. Además, el trabajo de Collier (2007) complementa que un gasto militar elevado no tiene un fuerte impacto al disuadir a la insurgencia, por el contrario, crea una carrera armamentista en que presiona a los grupos insurgentes a incrementar su armamento en la misma proporción, al

mismo tiempo que genera un mensaje político implícito, en que establece a la coerción como estrategia para resolver los problemas de seguridad. Asimismo, Collier concluye que una solución más eficiente al conflicto es el diálogo, el desarrollo de acuerdos que permitan reducir el gasto en defensa y al mismo tiempo resolver los problemas socioeconómicos que alimentan la rebelión.

Durante los últimos 50 años Colombia ha lidiado con uno de los conflictos internos de mayor duración en el mundo, pese a una tasa cercana a mil muertes por año, la cual le ha valido la clasificación de un conflicto de baja intensidad; la cíclica aparición de olas de violencia durante este extendido periodo de tiempo ha contribuido a la militarización del país. Entre los años 2002 y 2010 el gasto en defensa de Colombia se situaba entre el 5% y el 6% del PIB, una cantidad elevada que ubicaba al país entre los 10 presupuestos militares más altos a nivel mundial, durante el 2007, cuando tuvo su mayor auge, el presupuesto para defensa alcanzó el 6,32%, una cifra alarmante considerando que en comparación Estados Unidos gastó en defensa una cifra aproximada al 4,04% de su PIB, e incluso países europeos pertenecientes a la NATO tuvieron un gasto del 2% para ese mismo periodo (Isaza & Campos, 2008). Aun después de la desmovilización de 25.000 hombres armados pertenecientes a grupos paramilitares, y el desarrollo de los diálogos de paz con las FARC, el grupo guerrillero más grande en el país, para 2015 el gasto en defensa colombiano se redujo a apenas el 3,4% del PIB, apenas comparable con el 3,3% del ejército más grande del mundo, el de Estados Unidos.

Por supuesto, el incremento estable del gasto en defensa entre 2002 y 2010 fue proporcional al incremento del pie de fuerza, para 2007 el ejército colombiano estaba conformado por 209.741 hombres armados, para una proporción de 5 militares por cada 1.000 habitantes. Resulta entonces paradójico considerar que, al mismo tiempo, las FARC estaba conformada por 16.900 combatientes, el ELN por 3.700, y las AUC por 12.175, para un total de 32.775 combatientes irregulares (enemigos del estado) (Isaza & Campos, 2008), es decir, una equivalencia de casi 5 soldados por cada combatiente irregular. Para los más críticos del desmesurado gasto en defensa de la nación, estas cifras son solo evidencia de la ineficacia del ejército para combatir la insurgencia, por el contrario, ese dinero debería ser invertido en el fortalecimiento de las instituciones en las regiones más apartadas del país, las cuales son el foco de la violencia, y donde los niveles de desigualdad, corrupción, desempleo y educación, son (entre otros) los factores que alimentan la rebelión. Para el mismo periodo de 2002-2007 fueron capturados 27.290 guerrilleros, 9.841 fueron dados de

baja, 13.333 fueron desmovilizados, para un total de 50.464 guerrilleros retirados del combate, sin embargo, en ese mismo tiempo, las guerrillas lograron reclutar 42.363 nuevos combatientes, es decir a 84 nuevos reclutas por cada 100 retirados. Ahora bien, es alarmante considerar que estas cifras no incluyen las violaciones a derechos humanos que ha realizado el ejército como estrategia para recuperar el control territorial, es decir el asesinato de civiles, los llamados falsos positivos, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Pese a lo controvertida que resulta ser la eficacia militar, hoy en día, cuando se vislumbra en fin de los grandes grupos armados, es imposible negar la contribución de la acción militar para establecer el diálogo como única salida viable al conflicto. En un país centralizado, con una geografía compleja como lo es Colombia, el conflicto es viable por la poca o insignificante presencia de las instituciones estatales, la ineficacia del sistema penal, la escasa infraestructura para comunicaciones, y la creciente corrupción (Rubio, 2002). Entonces, las instituciones militares son las únicas capaces de llegar a esas regiones aisladas, y por lo tanto han sido de gran importancia para imponer el orden. En este sentido, este trabajo se desarrolla con el propósito de discutir las consecuencias económicas del elevado presupuesto de defensa en Colombia, para lo cual se consideran tanto las posturas que lo defienden, como un factor positivo de protección de capital humano y físico que afianza las instituciones que facilitan el crecimiento económico, así como las posturas que ven al gasto en defensa como algo necesario pero improductivo, que captura recursos precisos en otros ámbitos más importantes para atacar a las verdaderas causas del conflicto, como educación e infraestructura.

No obstante, desde finales de la década de 1980 se han establecido soluciones al conflicto no militares, los diálogos que culminaron con la desmovilización masiva de diferentes grupos guerrilleros, como el M19 en 1990, el EPL en 1994, las AUC en 2006, e incluso diferentes acercamientos con las FARC y ELN en 1998. En este sentido, el establecimiento de las políticas de seguridad democrática que sustentaban el desmesurado incremento del gasto militar son fuertemente cuestionadas, primero por la militarización de la cultura colombiana, al establecer la coerción como estrategia para disuadir a la insurgencia, y segundo por la altamente cuestionable eficacia de las instituciones militares. Pero, mientras hay quienes argumentan que las políticas de seguridad democrática solo lograron atrasar los diálogos de paz hasta un nuevo gobierno, hay quienes defienden que fue la acción militar lo que obligo a las guerrillas a buscar soluciones no militares al conflicto. Finalmente, y pese a los cambios en las políticas públicas de los últimos 4 años, cuando se determinó

que el dialogo es la única salida viable al conflicto, es difícil pensar en reducir el gasto en defensa sin esperar que esto no traiga consecuencias graves a la economía nacional. En estos momentos en que la desmovilización de los grupos guerrilleros más grandes del país hace necesario resolver los niveles de desigualdad, los modelos productivos del sector agrícola, mejorar la educación y empleo en las regiones más afectadas por la violencia, para así garantizar una verdadera paz estable y duradera, las políticas de gobiernos pasados nos dejan como herencia instituciones militares ineficientes, un alto pasivo pensional y escándalos por la violación de derechos humanos.

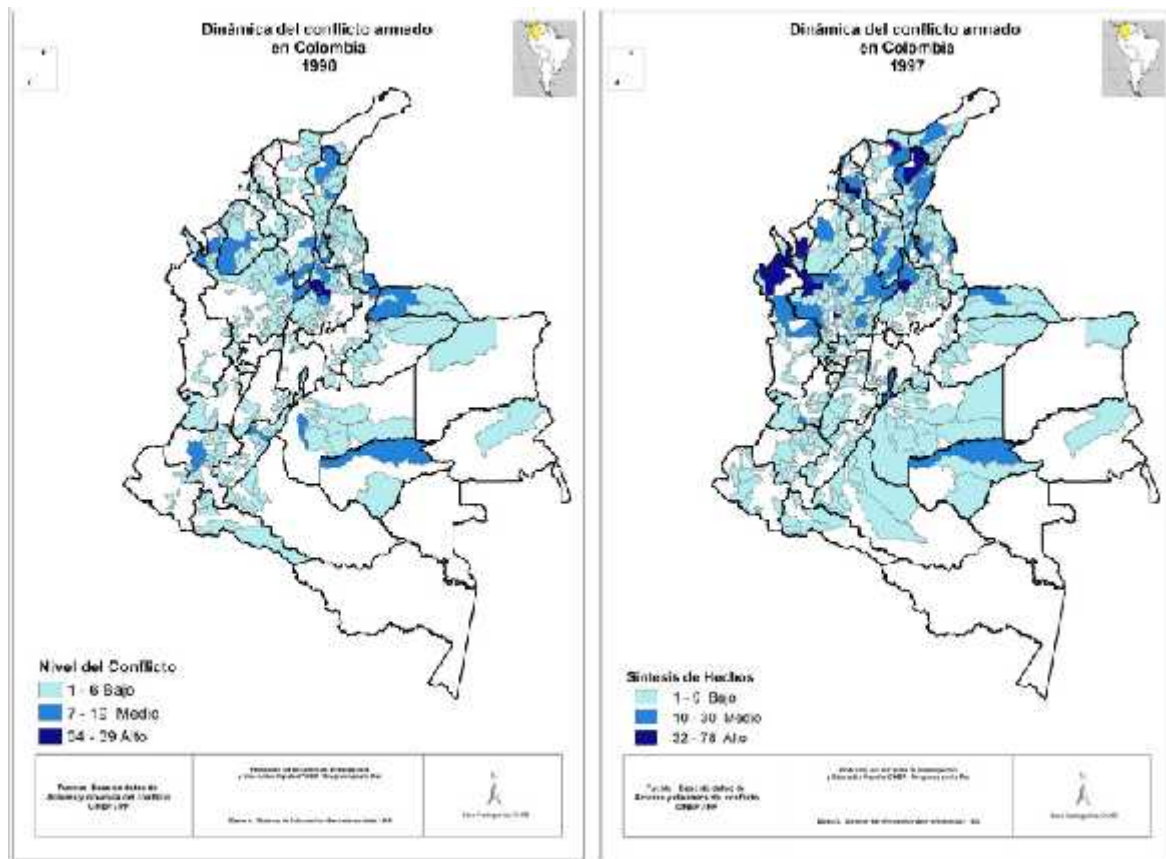
2.4 Conflicto en Colombia

Durante los últimos 50 años Colombia ha vivido un conflicto bastante heterogéneo en cuanto a los actores del conflicto y los esquemas de victimización, la confrontación procede de tensiones políticas y económicas presentes en la nación desde años anteriores al surgimiento de las guerrillas modernas. Sin embargo, la dinámica del conflicto ha tenido cambios significativos no solo por el desarrollo de políticas para combatir la insurgencia, sino por el surgimiento de actores involucrados y formas para financiar la guerra.

Si bien, el periodo de conflicto armado que sufre el país se remonta a 1964, cuando se crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), después el Movimiento M-19, el Quintín Lame, y el ADO. Este trabajo se centra en el periodo comprendido entre los años 1997-2011, el cual ha sido estudiado por diferentes autores y se han identificado los siguientes periodos: i) Periodos de ajuste y estancamiento (1987-1997), ii) periodo de recrudescimiento (1997-2005), iii) periodo de reacomodamiento (2005-2011).

A partir de la década de 1980 la dinámica del conflicto se caracteriza por la modificación del financiamiento y estrategias de guerra, el recrudescimiento de la violencia por tácticas de control territorial agresivas por parte de los grupos guerrilleros, la intensificación de las acciones de las fuerzas armadas, el auge del narcotráfico como combustible para el conflicto, y el surgimiento de los grupos paramilitares (Durán I. M., 2011). Sin embargo, a comienzos de la década de 1990 se presenta una leve disminución de la actividad armada, esta calma relativa se denominó estancamiento (Durán I. M., 2011).

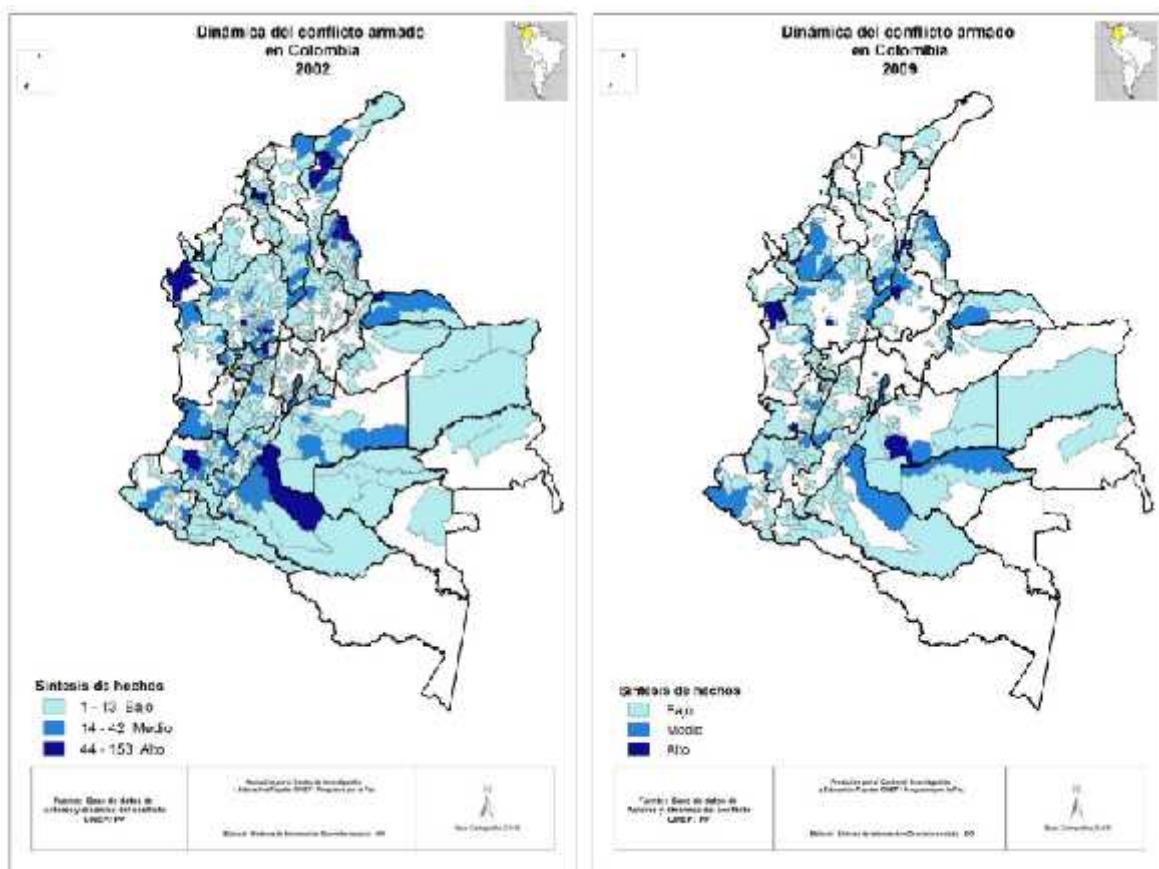
Ilustración 1: Dinámica del Conflicto armado en los periodos de ajuste y comienzos del recrudecimiento



Fuente: Centro de Memoria Histórica

El periodo de recrudecimiento, se caracteriza por aumento de la violencia a diferentes regiones del país y a niveles nunca antes vistos, por un lado, el fallido dialogo de paz con las FARC, cuya zona de despeje favoreció la expansión de esta guerrilla al suroccidente del país; por otro lado, como respuesta a la insurgencia se da el auge del paramilitarismo, que lleva a la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes financiados por los terratenientes del país, rápidamente se consolidan como el tercer actor del conflicto al intentar restablecer el control territorial, de manera que optan por conseguir alianzas con el sector público (en ámbitos militares y políticos), y hostigar a la población civil bajo sospechas de relaciones con la guerrilla, mediante masacres y desplazamientos masivos.

Ilustración 2: Dinámica del Conflicto armado a finales del periodo de recrudescimiento y reacomodamiento



Fuente: Centro de Memoria Histórica

Durante este periodo, pese a que ningún actor del conflicto es ajeno a ninguna táctica de guerra, los intereses estratégicos se reflejan en las formas de ejercer la violencia como esquema de control territorial. Por un lado, la guerrilla se enfoca en combatir objetivos militares y políticos, es quien lidera los casos de secuestro, no solo como forma de financiamiento, sino como forma de ejercer presión política; así mismo, se caracterizan por sus ataques a poblaciones y atentados contra infraestructura. Por otro lado, los paramilitares se caracterizan por el uso de masacres y desplazamientos masivos, las alianzas con terratenientes y militares aseguran mayor estabilidad en sus territorios y ofrecen una oportunidad para el lavado de activos ejerciendo actividades como el cultivo de palma africana y la ganadería, en este sentido, la existencia de grupos paramilitares en regiones donde no había presencia guerrillera previa pone en duda la naturaleza contrainsurgente de estos.

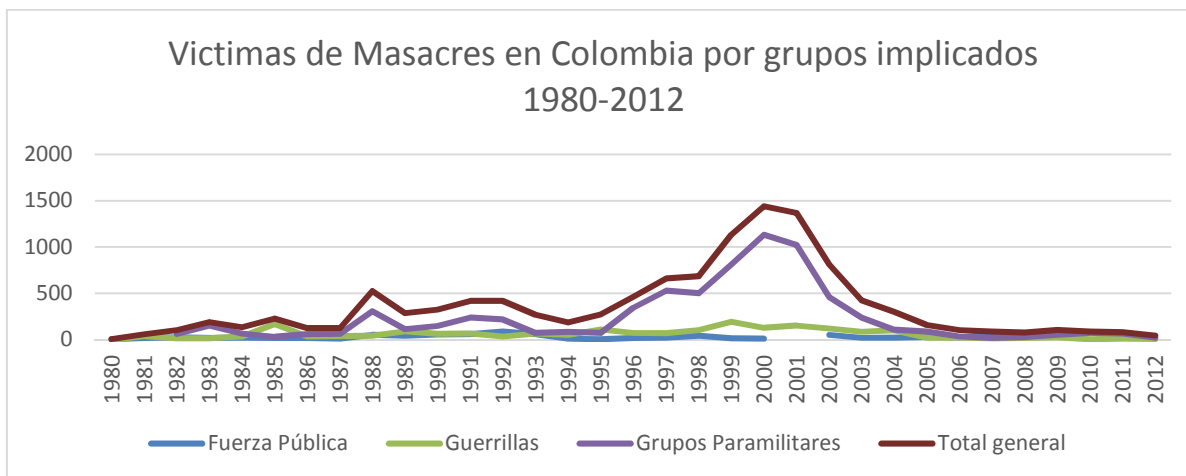


Ilustración 3. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

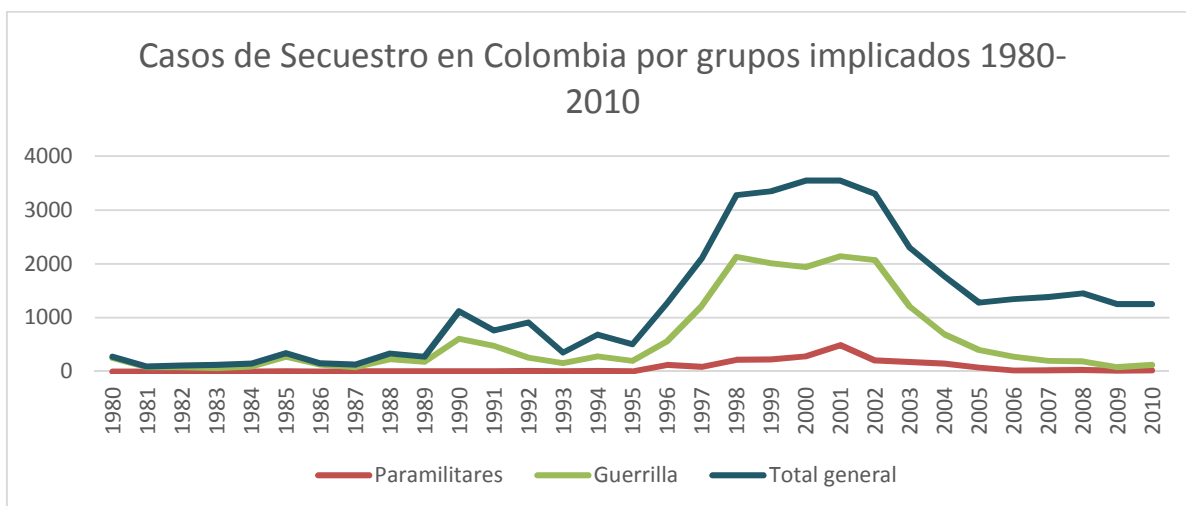


Ilustración 4. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

El periodo de reacomodamiento significó la disminución de los índices de violencia, en parte, como resultado de las políticas de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, la cual incluyó la de desmovilización de los grupos paramilitares. No obstante, los cambios estratégicos al interior de las FARC y ELN, así como el auge del neo paramilitarismo, mantienen en alto los índices de violencia.

3. Conflicto armado en algunas regiones de Colombia

3.1 Norte de Santander y Santander

Diversos autores argumentan que el conflicto colombiano moderno no es un fenómeno espontáneo de hace 50 años, sino la continuación de las diferentes olas de violencia que ha vivido la nación desde su independencia. La región de Santander es uno de los eslabones que conecta los diferentes momentos de la violencia en Colombia y su evolución en los grupos armados actuales. En 1965, la influencia de la revolución cubana seduce a jóvenes y estudiantes que crean el ELN, el cual opera como guerrilla móvil inicialmente concentrada en esta región. Pero a diferencia de otras guerrillas, el ELN no despierta la violencia bipartidista, en su lugar se subordinan a las necesidades militares de la población rural y urbana, toda vez que intenta ser un nuevo tipo de guerrilla (Zuluaga, 2009).

A comienzos de la década de 1970 las masivas movilizaciones campesinas y las manifestaciones universitarias desestabilizan el orden político creado a partir del frente nacional. Para esta época las guerrillas rurales no representan una amenaza seria para el Estado, y sus acciones se limitaron a zonas apartadas como el Magdalena Medio santandereano (Zuluaga, 2009). Durante este tiempo, también se consolida el narcotráfico con el surgimiento de la cocaína, para la siguiente década, los narcotraficantes financiarían la incursión del paramilitarismo en diferentes regiones del país agravando la violencia a nivel nacional.

La región de los Santanderes se vio gravemente afectada por el recrudecimiento de la violencia, su geografía montañosa dio refugio a las FARC, al ELN y a grupos Paramilitares, además, su limitación con Venezuela permitió el desarrollo de rutas de tráfico fortaleciendo el cultivo de coca en la región, particularmente en el Catatumbo (Zuluaga, 2009). Sin embargo, la riqueza en recursos que goza la región también juega un papel importante en la configuración de los grupos armados ilegales.

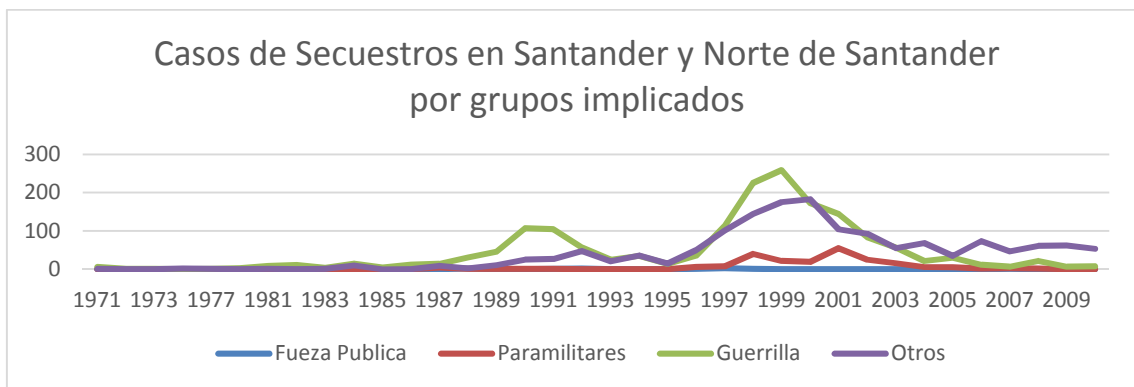


Ilustración 5. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

La expansión del ELN sigue el patrón de los yacimientos de petróleo (Zuluaga, 2009). Su forma de operar consiste en el cobro de extorciones a las administraciones locales, y cuotas de seguridad a empresas petroleras, esta guerrilla también se ha beneficiado con el tráfico de combustible. Paralelamente, la guerrilla de las FARC se ha beneficiado del narcotráfico, y su crecimiento exponencial rápidamente la situó como la guerrilla más grande del país, su incursión en la región de los Santanderes se dio a comienzos de la década de los ochenta. Para la década de 1990 las guerrillas logran influenciar la participación política consolidando su control sobre los territorios estratégicos del Magdalena Medio y el Catatumbo.

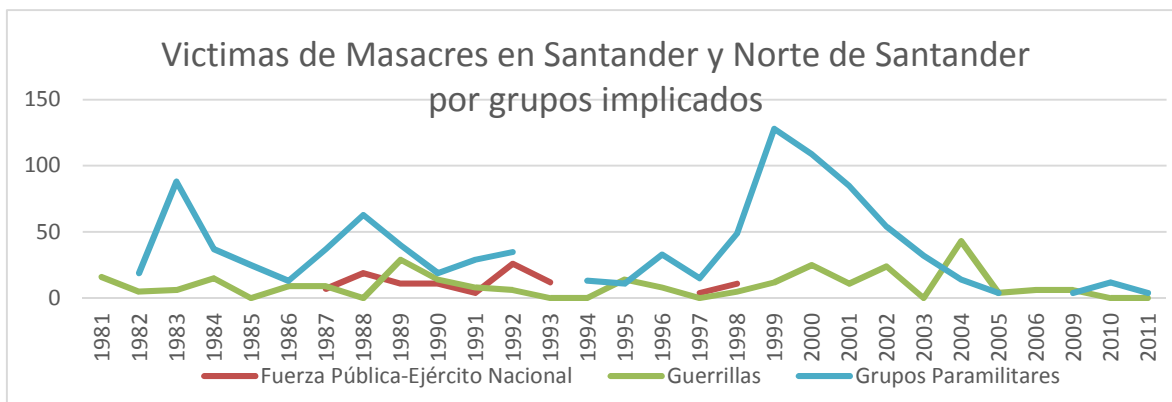


Ilustración 6. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Con la expansión y consolidación del paramilitarismo las rivalidades territoriales se acentúan en los Santanderes. Para comienzos del nuevo milenio, los grupos paramilitares habían desplazados a las guerrillas como los principales infractores del derecho internacional humanitario (Zuluaga, 2009). La complicidad de la fuerza pública permite a los paramilitares alcanzar mayor control territorial, como en la región del Catatumbo donde se

incrementa los índices de desplazamiento, pero a su vez favorece el desarrollo del cultivo de palma africana y demás megaproyectos agroindustriales en los Santanderes (Zuluaga, 2009).

Con la desmovilización de los paramilitares, el ELN se reestablece como el grupo dominante en la región, desde la cual controla la expansión hacia el sur y demás departamentos petroleros en la Orinoquia. Las FARC mantienen una importante presencia en la región, lo cual significó enfrentamientos entre las guerrillas en la segunda mitad de la década del 2000, situación que fue aprovechada por el ejército para combatir la insurgencia, especialmente a las FARC. A pesar de los esfuerzos de la fuerza pública, las guerrillas no han sido derrotadas militarmente, y sumado a la presencia de bandas criminales, son una amenaza constante para la población civil. El control territorial en la región es importante para el desarrollo de rutas de narcotráfico hacia el pacífico colombiano, de manera que la región mantiene altos índices de violencia.

3.2 Arauca y Casanare

La región de la Orinoquia y los llanos orientales cuenta con los mayores yacimientos de petróleo del país, la región exporta petróleo desde la década de 1980, a partir de 1994 Arauca y Casanare reciben el 15% y 45% de total las regalías petroleras respectivamente, estas se consolidan como la principal fuente de financiamiento anual para los departamentos aportando aproximadamente un 65% para los planes de inversión. A pesar de la riqueza en recursos de la región, para el 2008 ningún departamento en la Orinoquia ha logrado cumplir sus metas de educación, salud, agua potable o mortalidad infantil (González, 2011).

Las regalías se entienden como la compensación que recibe el Estado por la explotación del subsuelo y la extracción de recursos no renovables. Sin embargo, estas se encuentran comúnmente asociadas con el desvío de recursos, corrupción, y captura de recursos por parte de grupos armados ilegales, esta tendencia se evidencia con el incremento de atentados a oleoductos y el robo de combustible para financiar los grupos ilegales, mientras que, las inversiones en la industria extractiva son blanco de corrupción y el pago de cuotas de seguridad (González, 2011).

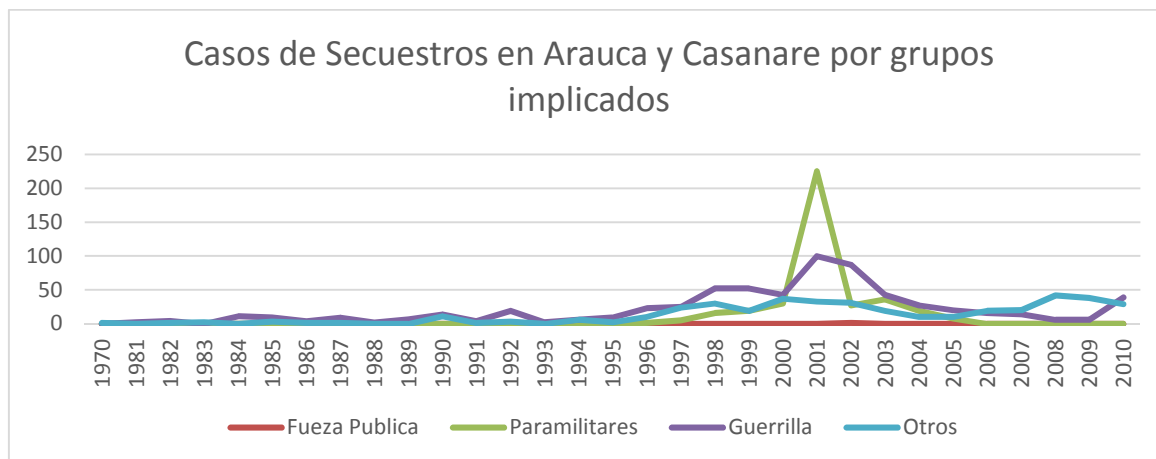


Ilustración 7. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Como se mencionó anteriormente, el petróleo no es un recurso de fácil acceso, su extracción requiere de grandes inversiones en tecnología, de manera que el recurso en sí no es atractivo para grupos ilegales, pero la industria es un blanco fácil para la extorsión. En concordancia, el problema de control territorial sufrió grandes cambios a partir de 1995, cuando grupos paramilitares lograron el control sobre territorios con influencia del ELN y de las FARC. Varios grupos paramilitares se establecieron en Casanare, entre ellos los Carranceros, los Buitragueños, las Autodefensas del Casanare y el Bloque Centauros (González, 2011), grupos que una vez posicionados hacían uso tanto de la fuerza como de la corrupción para posicionar a sus allegados en puestos públicos como alcaldías, gobernaciones y demás entidades gubernamentales. La parapolítica pasó entonces a ser el fenómeno dominante de la región con la complicidad de sectores de la fuerza pública y empresas privadas, desplazando a los grupos guerrilleros.

Con el control territorial, los paramilitares pronto desarrollaron corredores para el tráfico de cocaína y cultivos ilícitos. Varias ONG han denunciado las violaciones a los derechos humanos asociadas a la seguridad prestada a empresas privadas, las tasas de secuestro crecieron rápidamente por encima del promedio nacional en el periodo 1996 - 2004, y las operaciones en territorios que limitan con resguardos indígenas, áreas asignadas a comunidades negras, y reservas naturales, fueron el foco de frecuentes tensiones con grupos sociales. Finalmente, es importante destacar que a partir de 2004 los índices de violencia han disminuido a partir de las desmovilizaciones, guerras entre grupos paramilitares y el mayor control territorial de las fuerzas armadas.

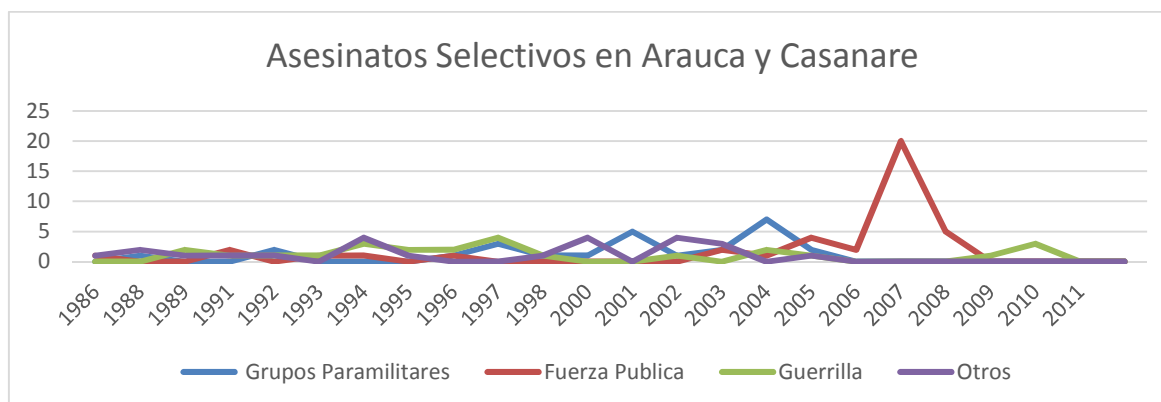


Ilustración 8. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

No obstante, el auge del paramilitarismo, las regiones de Arauca y Casanare han sido históricamente dominadas por las guerrillas, particularmente el ELN que ha consolidado su dominio en la región mediante el Frente de Guerra Oriental. En la primera mitad de la década del 2000, las relaciones entre las FARC y el ELN presentaron hostilidades a nivel nacional, particularmente en Arauca, el asesinato del jefe de finanzas de las FARC, alias “Che”, a manos de alias “Queca” del ELN, agudizó los problemas de control territorial; en medio de la confrontación se establecieron zonas de influencia donde la violencia selectiva era utilizada contra la población civil como método de control. Esta situación elevó los índices de desplazamiento entre 2006 y 2010 incluso mayores a los que se presentaron durante el auge del paramilitarismo entre el 2001 y el 2003 (Nuñez, 2012). Esta situación fue aprovechada por la fuerza pública para fortalecer su dominio en la región y debilitar las estructuras guerrilleras.

3.3 Meta, Caquetá y Putumayo

La región de los llanos ha visto una remarcada presencia histórica de los grupos armados ilegales, además, el desarrollo de la industria agrícola y petrolera, lo mismo que la proliferación de los cultivos de coca, han favorecido el crecimiento del conflicto actual, que se agudizó cuando en el año 1964, Manuel Marulanda Vélez y antiguos compañeros en la guerra liberal conservadora conformaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC – EP, después de un ataque del ejército nacional. Luego la región vivió el escalamiento del conflicto con la respuesta paramilitar y la posterior conformación de las Autodefensas unidas de Colombia.

Hoy en día, el Meta es el departamento de mayor producción petrolera del país, para 2013 aportaba aproximadamente el 49% del total del país (Montenegro, 2013), sin embargo, al igual que Arauca y Casanare, para 2011 el departamento tampoco ha logrado cumplir sus metas de educación, salud, agua potable o mortalidad infantil. De manera que, el beneficio de las regalías no solo es imperceptible para la población, sino que gran parte de estos recursos fueron desviados hacia grupos ilegales mediante la corrupción y el pago de seguridad a los actores armados. Los niveles históricos de desigualdad se han entrelazado con el narcotráfico y las industrias petrolera y de palma, para alimentar el conflicto armado en la región.

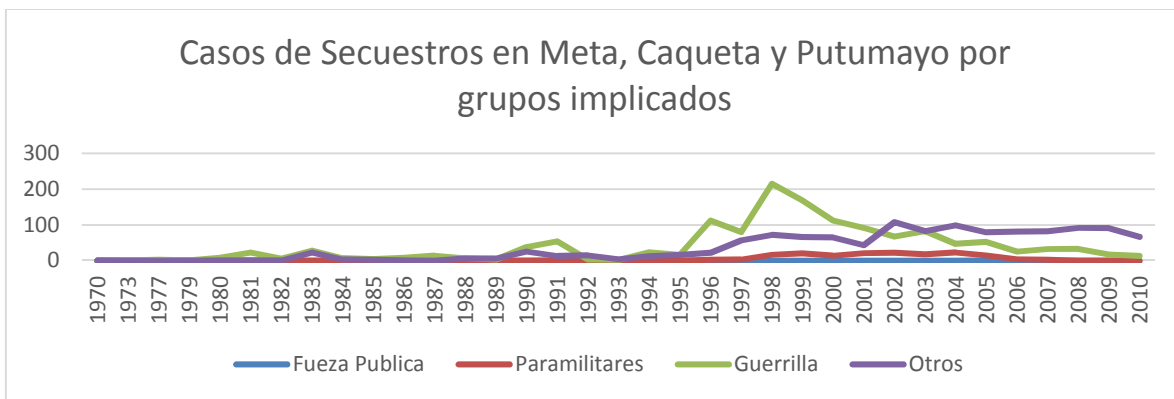


Ilustración 9. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

En la década de 1970 diferentes guerrillas se refugiaron en la lejanía de los llanos orientales, especialmente las FARC quienes se destacan por su dominio en la región, en esta época las guerrillas rurales no representan una seria amenaza para el Estado (Zuluaga, 2009). No obstante, con el escalamiento del conflicto a partir de la década de 1980, los departamentos del Meta, Caquetá y Putumayo han sido fuertemente golpeado por olas de violencia. Pese a que las FARC han tenido una significativa presencia en la región marcada por el establecimiento del Estado Mayor del Bloque Oriental (EMBO), desde la década de 1980 comienza la llegada de los narcotraficantes, que en alianza con los ganaderos y hacendados de la región patrocinan la creación de ejércitos privados para defender sus negocios de las guerrillas. A mediados de la década de los noventa, el fenómeno del paramilitarismo se agudiza con la aparición de las Autodefensas, cuyo control territorial se establece con diversos actos de violencia, entre los que se destaca la masacre de Mapiripan en 1997, por la cual se ha condenado al Estado colombiano por la colaboración de miembros del ejército con el paramilitarismo.

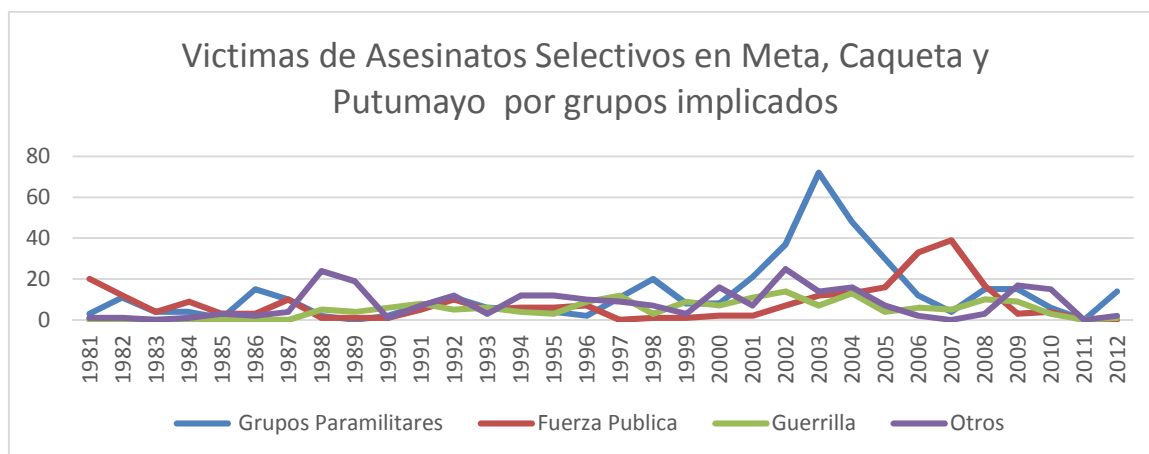


Ilustración 10. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

A pesar del fortalecimiento del paramilitarismo en la región desde 1994, y el auge de la parapoltica, no ha sido posible evidenciar un vínculo directo entre el cultivo de la palma y el financiamiento del conflicto en la región. Al igual que el petróleo, la palma es una industria con altas barreras de entrada, que solo es rentable en el largo plazo, por lo que no se considera un recurso “saqueable”, pero, el cultivo agro industrial de la palma cumple tres funciones para los grupos armados: sirve para el lavado de activos, la reserva de valor, y el control territorial para el desarrollo de corredores para el narcotráfico (Montenegro, 2013).

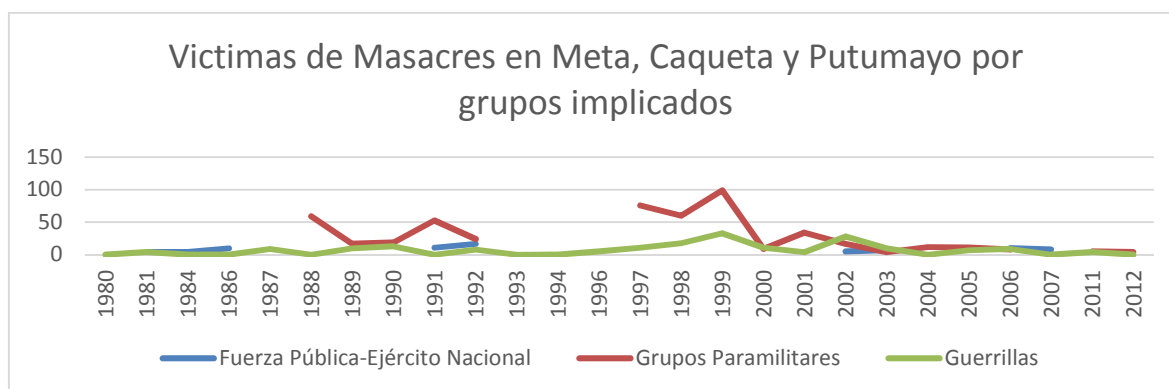


Ilustración 11. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

A partir de 2003, el conflicto en la región se ve marcado por la desmovilización parcial de los grupos paramilitares y su reconfiguración como bandas criminales, los actos de violencia disminuyen y se orientan hacia el control del narcotráfico en la región. Por otro lado, la fuerte ofensiva del gobierno llevo a la reorganización de las FARC, en 2008 adoptan el plan renacer, el cual implica la descentralización de sus estructuras y el desarrollo de tácticas

de hostigamiento. Para 2010, después de la muerte del líder guerrillero “el Mono Jojoy”, las FARC se reagrupan, fortaleciendo el Bloque Oriental que pasa a ser conocido como el Bloque Comandante Jorge Briceño, el cual protagoniza el mayor número de acciones guerrilleras. Finalmente, el éxito de las políticas antidroga llevo a la reducción del número de hectáreas sembradas de coca, mientras que en 2004 el Meta concentraba la mayor parte de los cultivos ilícitos con un aproximado de 19.000 hectáreas, para 2011 logro reducirse a 3.000 (Montenegro, 2013).

3.4 Antioquia

El departamento de Antioquia ha sido el más afectado por la guerra, durante el periodo entre 1996 y 2004 padeció de los índices más altos de violencia en el país, este departamento es frecuentemente escenario de confrontaciones y se destacan sus regiones vulnerables al conflicto, como el Urabá Antioqueño y el Magdalena Medio. En general, la región esta provista de recursos naturales que son combustible para los grupos armados ilegales, principalmente el oro y los cultivos de palma africana, pero también, su posición estrategia permite una salida al pacífico para los corredores de narcotráfico provenientes del interior del país. Desde finales de la década de 1980, las guerrillas habían establecido una estrategia de control territorial en el país, para la región de Antioquia esto significó el fortalecimiento del eje estratégico Arauca-Choco por parte del ELN, y la ampliación del control en la zona norte por parte de las FARC (Espinosa & Valderrama, 2011).

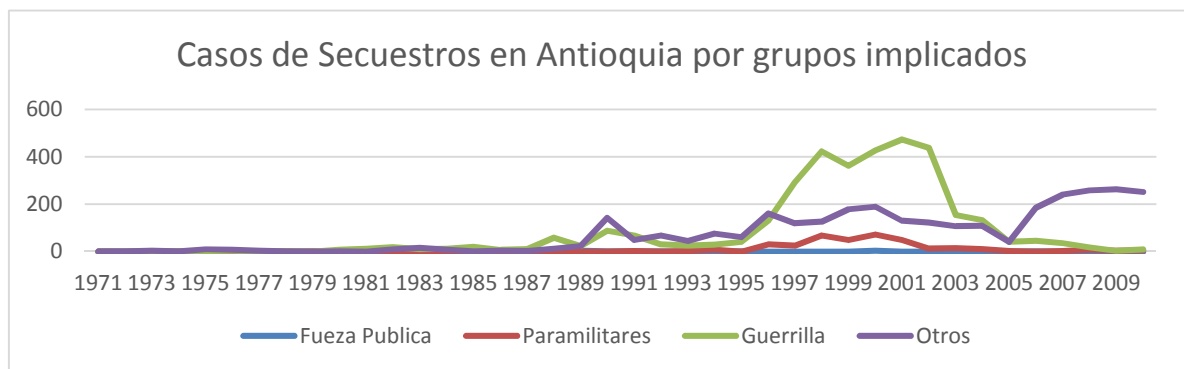


Ilustración 12. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

A pesar de ser una zona fuertemente relacionada con el narcotráfico a partir de la influencia de Cartel de Medellín, y sus alianzas con grupos paramilitares, la región de Antioquia presenta índices de violencia atada al conflicto significativamente menores antes de la consolidación de los grupos paramilitares. El paramilitarismo se afianza en la región y ocurren masacre como la del Aro en 1997, a partir de esa fecha la presencia paramilitar invadió centros urbanos con la complicidad de las fuerzas armadas y la policía (Espinosa & Valderrama, 2011), al igual que el resto del país, el auge del paramilitarismo dispararía los índices de violencia. Sin embargo, entre los años 2001 y 2002, las disputas al interior de las AUC redistribuyen el control territorial, fortaleciendo el corredor del narcotráfico proveniente del Magdalena Medio. Ante la negativa del Bloque metro de permitir que se antepusieran los intereses del narcotráfico dentro de las autodefensas, el Bloque Cacique Nutibara consolida su dominio en la región mediante alianzas con pandillas locales, con las cuales no solo combate a las guerrillas, sino que somete al Bloque Metro para desarrollar libremente el narcotráfico.

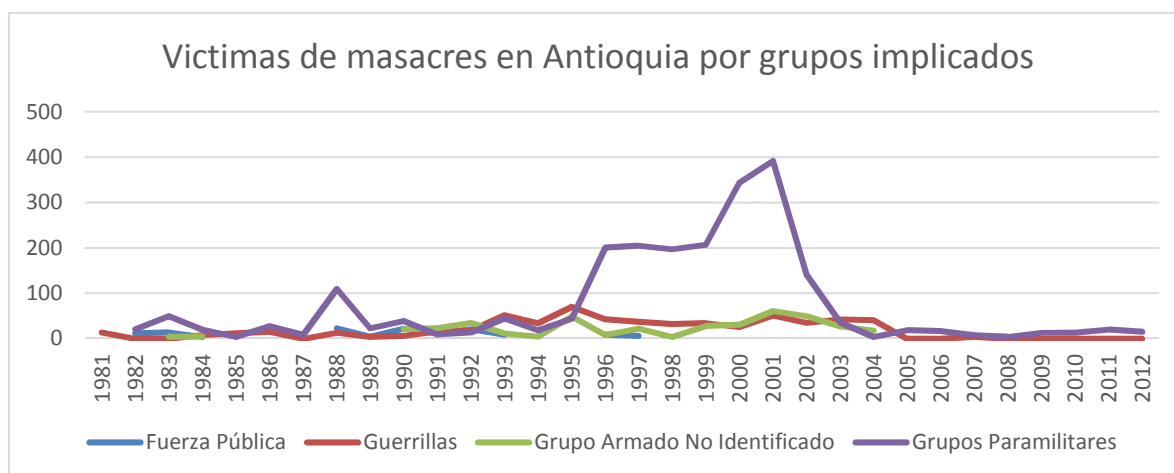


Ilustración 13. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Antes de comenzar el periodo de desmovilización de las autodefensas, la presencia de guerrillas en el territorio se hace marginal, debido en parte a la acción paramilitar, a las acciones militares, y a las confrontaciones entre las FARC y el ELN (Espinosa & Valderrama, 2011). Los actos de violencia alcanzan un pico sin precedentes entre los años 1998 – 2001, producto de la expansión guerrillera y la correspondiente respuesta paramilitar, evento que agravó el escalamiento del conflicto. A partir de 2004 se presenta un declive tanto en los actos de violencia, como en la presencia de grupos armados ilegales,

pocos años antes de iniciar el proceso de desmovilización, los grupos paramilitares consolidan su control territorial mediante masacres, pese a la reducida presencia guerrillera.

Después del proceso de desmovilización, los índices de violencia han disminuido progresivamente, el ELN tiene una presencia marginal, y las Bandas criminales se posicionan al sur del departamento. Sin embargo, las FARC recuperan protagonismo en la región e incrementan sus enfrentamientos con las fuerzas públicas (Espinosa & Valderrama, 2011).

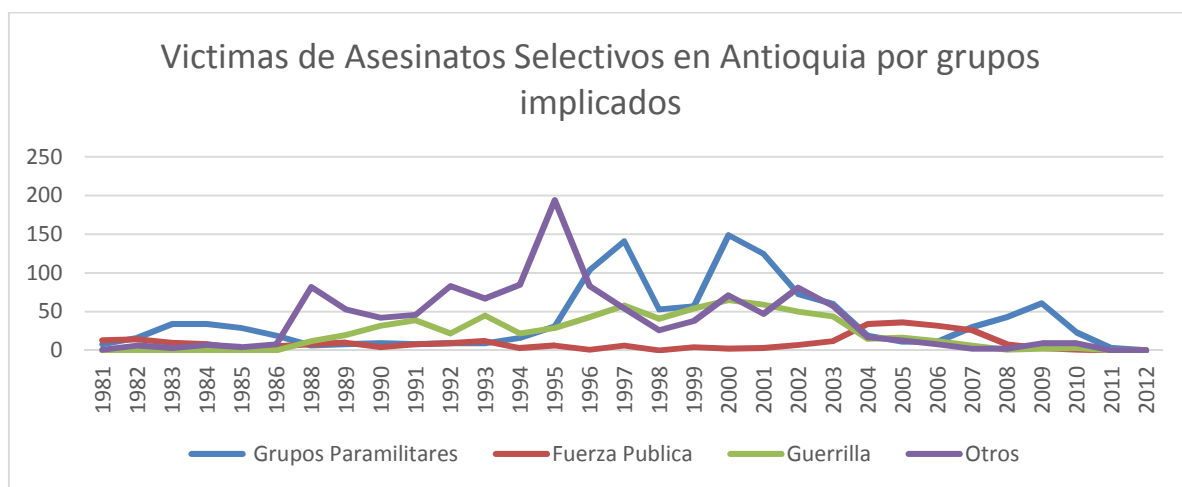


Ilustración 14. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

De manera similar a las regiones petroleras del país, en Antioquia el desarrollo de la industria minera ha atraído a los actores del conflicto como una forma de financiamiento, tanto por ser un recurso “saqueable” como por tratarse de una industria susceptible a la corrupción y el cobro de extorsiones. Con el incremento del valor internacional del oro, la industria minera comienza a reemplazar al narcotráfico como actividad de financiamiento para los grupos ilegales desde el 2005 (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016), dado que el oro es de legal extracción, es fácilmente intercambiable, y es una reserva de valor. Además, los yacimientos de oro son una fuente de regalías, y como se ha mencionado anteriormente, las regiones altamente dependientes de recursos naturales, son especialmente vulnerables a extorsiones y corrupción debido a su poco desarrollo institucional.

El departamento de Antioquia cuenta con el 10% de su área titulada para la explotación minera (Acosta, 2013). En una economía en crisis, los inversionistas buscan evadir la incertidumbre invirtiendo en *commodities* e incentivando su explotación. La informalidad del

sector y la falta de legislación permiten a los grupos ilegales involucrarse rápidamente con el negocio de la minería, inicialmente, mediante el cobro de extorciones y pagos de seguridad a las grandes empresas durante las etapas exploratorias, pero desarrollando la extracción una vez que se ha encontrado un yacimiento de oro (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016).

La minería ilegal tiene un impacto significativo en los índices de violencia, particularmente en las tasas de homicidios, pero no es significativo en los índices de desplazamiento (Idrobo, Mejia, & Tribin, 2014). Una explicación plausible consiste en que los grupos dominantes buscan ejercer el control territorial, pero mantener la mano de obra, dado que la minería se trata de una labor dispendiosa, al mismo tiempo que intentan no atraer la atención de las autoridades (Idrobo, Mejia, & Tribin, 2014).

3.5 Eje Cafetero

A partir de la década de 1970, la región ubicada en el corazón del “triángulo de oro” (con Bogotá, Cali y Medellín en cada esquina) ha mostrado una constante cadencia en su actividad económica. A partir del declive de la bonanza cafetera, la producción de este se dispersó hacia los campesinos, a medida que desaparecían los medianos productores (Toro, 2005). Como resultado, esta nueva generación cafetera trajo la cultura del monocultivo y los agroquímicos, que, junto al poco desarrollo de agricultura sostenible, precipitaron la región hacia la pobreza (Toro, 2005).

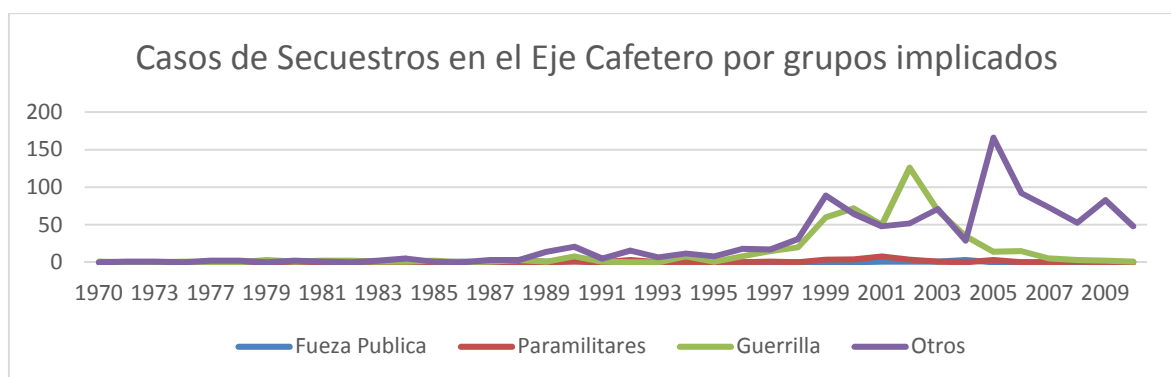


Ilustración 15. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

En poco tiempo, las tierras cafeteras fueron del interés de los narcotraficantes, para la primera mitad de la década de 1980 los ingresos del narcotráfico habían avanzado progresivamente en la región, lo que ayudó a mantener la imagen de un sector productivo, para finales de la misma década, comienzan a aparecer los síntomas de violencia asociados a la desigualdad (Toro, 2005). Durante la década de 1990, en la región comprendida en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda las tasas de homicidios violentos se elevaron por encima del promedio nacional, al finalizar la década, una caída histórica en los precios del café, y el terremoto de 1999, agravan la situación social de la región.

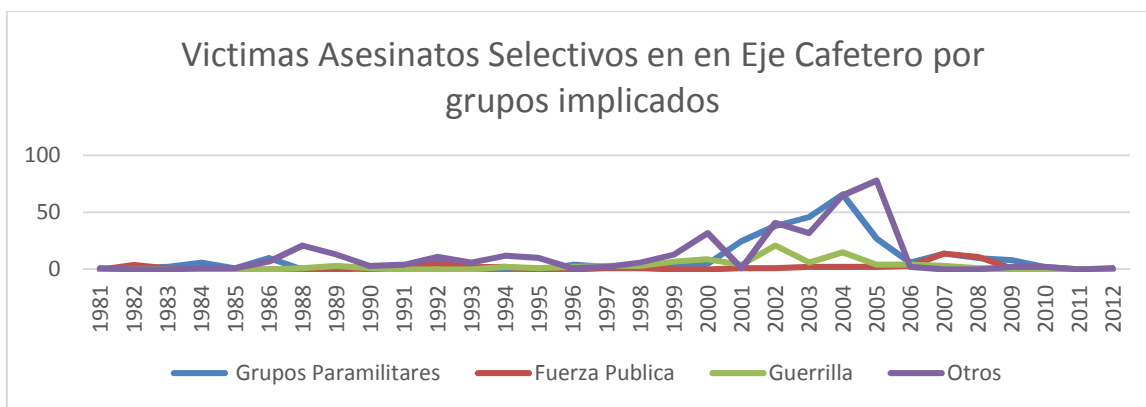


Ilustración 16. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Al igual que la mayoría de departamentos del país, la región del eje cafetero se vio fuertemente afectada por el auge del paramilitarismo, con una participación guerrillera marginal. De manera similar a como se desarrolló en otras regiones, el paramilitarismo se infiltró en las actividades económicas de la región ganando control territorial para el desarrollo de corredores de narcotráfico hacia el pacífico, y usando la actividad cafetera como fachada para el lavado de activos y financiamiento mediante extorsiones a los empresarios locales.

3.6 Boyacá

La región de Boyacá resulta ser un caso particular dada su riqueza en esmeraldas. Tradicionalmente, Colombia se ha posicionado como uno de los mayores productores de esmeraldas a nivel mundial, no solo por su volumen de producción sino también por su

calidad. Pese a que la producción esmeraldera se concentra en Boyacá, a diferencia de otros recursos naturales que han sido calificados como combustible para la guerra (coca, oro, petróleo, palma y ganadería), las esmeraldas, que, si bien han estado atadas a las diferentes olas de violencia en la región, no han sido vinculadas con el financiamiento del conflicto armado a nivel nacional (Gutierrez & Barón, 2008).

Similar al caso del oro, las esmeraldas son un recurso “saqueable”, cuyo mercado no se encuentra limitado por la legislación que combate a la coca, es decir, tiene fácil acceso a los mercados internacionales. En términos de Gutiérrez y Barón (2008), el problema de los regímenes consiste en la construcción de instituciones de extracción para controlar los ingresos sobre los bienes “saqueables”. A diferencia de la guerra financiada principalmente con narcotráfico, los esmeralderos de Boyacá lograron ganar legitimidad como empresarios, y aun después de las olas de violencia, la región cuenta con algún tipo de orden social.

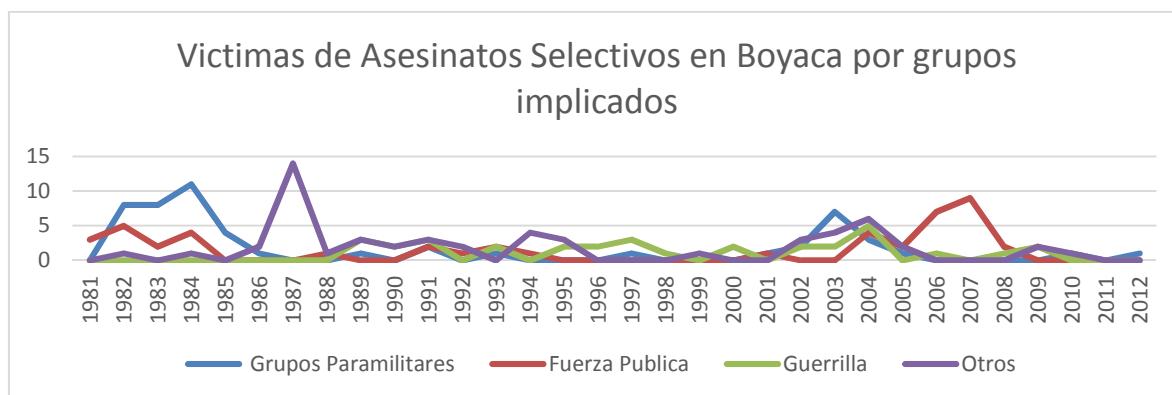


Ilustración 17. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Las primeras olas de violencia esmeraldera surgen en la década de 1960, cuando en la región aparecen los primeros grupos de seguridad paraestatal conformados por líderes esmeralderos. (Gutierrez & Barón, 2008). Pese a los intentos por consolidar las instituciones estatales en la región, para 1966 el 95% del mercado mundial de esmeraldas dependía del mercado negro colombiano (Gutierrez & Barón, 2008). Pese a asignarse la vigilancia de las minas al ejército, el escaso pie de fuerza no contaba con los medios de transporte necesarios para recorrer la región, además los delegados del gobierno se enfrentaban al dilema de ceder a la corrupción o arriesgarse a un atentado. Ante el estallido de la

guaquería y los asaltos, los líderes esmeralderos, quienes habían acumulado mayor capital, presionaban al gobierno para que los legitimara como empresarios legales, y el Estado acabara con su monopolio sobre las minas, permitiendo la legalidad de la actividad minera. No obstante, las constantes disputas por el control de las minas llevaron a un recrudecimiento del conflicto a comienzos de la década de 1970. Finalmente, en 1978 se firma el primer pacto de paz entre los esmeralderos del occidente de Boyacá, unos años después de la licitación y adjudicación de las minas de esmeraldas a particulares para su explotación (Gutierrez & Barón, 2008).

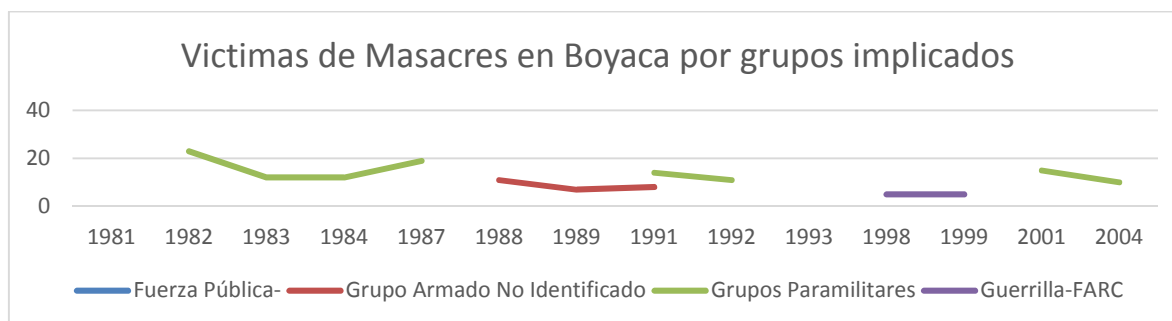


Ilustración 18. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Pese al orden social alcanzado, el acuerdo entre gobierno y los líderes esmeralderos no fue suficiente para acabar con la minería ilegal, la guaquería y esmeralderos emergentes se desarrollaron paralelamente en acuerdos con los empresarios de la región, de manera que, a finales de la década de 1980, se generó una nueva ola de violencia debido a los enfrentamientos entre familias dedicadas a la minería ilegal. Algunos esmeralderos aprovecharon la oportunidad para expandir su dominio, mientras que otros solicitaron la participación del ejército, al mismo tiempo, el volumen de ventas de esmeraldas se triplicó entre 1986 y 1989, pero a pesar de los ingresos, una parte del conflicto comenzó a ser financiada por el narcotráfico (Gutierrez & Barón, 2008). La participación del narcotráfico en el conflicto esmeraldero comienza con la intromisión en la región de Gonzalo Rodríguez Gacha y el Cartel de Medellín, en alianza con algunos empresarios, sin embargo, la muerte del narcotraficante hace posible la firma de un nuevo tratado de paz entre esmeralderos a comienzos de la década de 1990 (Gutierrez & Barón, 2008).

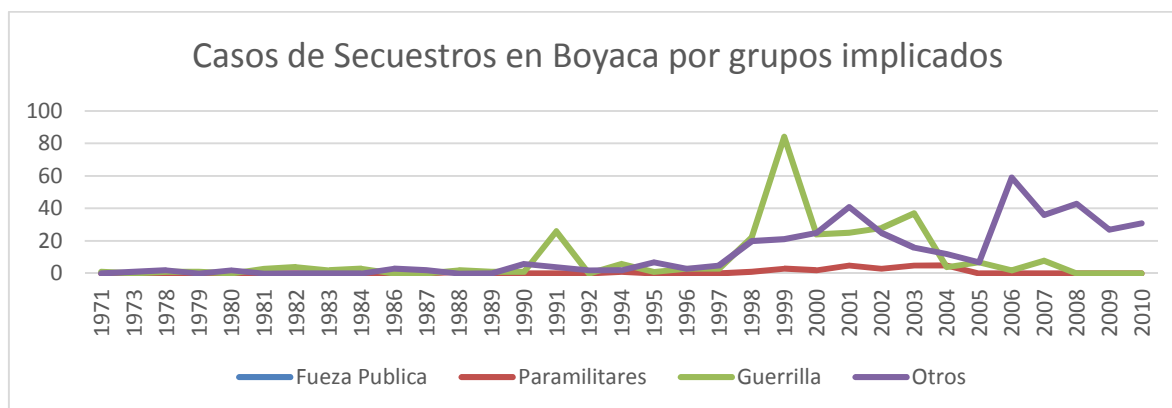


Ilustración 19. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Este último pacto de paz fue innovador en la medida en que se involucró la participación de lo esmeralderos informales más influyentes, además de la exclusión del narcotráfico. En mayo de 1991 se creó un consejo de paz, conformado por líderes esmeralderos, la iglesia, y autoridades civiles y militares. Más adelante en el mismo año, se afianzaron los acuerdos con la figura formal del Comité Permanente de Normalización, Verificación, Pacificación y Desarrollo del Occidente de Boyacá; hasta la actualidad, el orden social se ha mantenido estable, los esmeralderos pagan impuestos y colaboran con la policía para mantener el control de la región y limitar las influencias externas (Gutierrez & Barón, 2008), por ejemplo, en 2007 fue asesinado Yesid Campos, un esmeraldero de quien se aseguraba estaba vinculado con jefes paramilitares e introdujo cultivos ilícitos al occidente de Boyacá, se describió dentro de las pistas que, detrás del crimen se encontraban poderosos jefes esmeralderos.

3.7 Pacífico (Choco, Cauca y Nariño)

Al comenzar la década de 1990 la región del pacífico colombiano se encontraba al margen de los intereses territoriales de los grupos armados, si bien existe presencia histórica de grupos guerrilleros en Cauca y Nariño, el actuar de estos grupos era mayoritariamente transitorio, y el valor estratégico de la región consistía en su ubicación privilegiada para comunicar otras regiones del país. La falta de confrontación por parte del Estado se debe al interés marginal de las instituciones de la época por el Pacífico colombiano, ocupado en su mayoría por comunidades negras y poblaciones indígenas, donde solamente el interés

económico atrajo más adelante a compañías madereras, palmicultores, y comerciantes, entre otros (Efren, 2001).

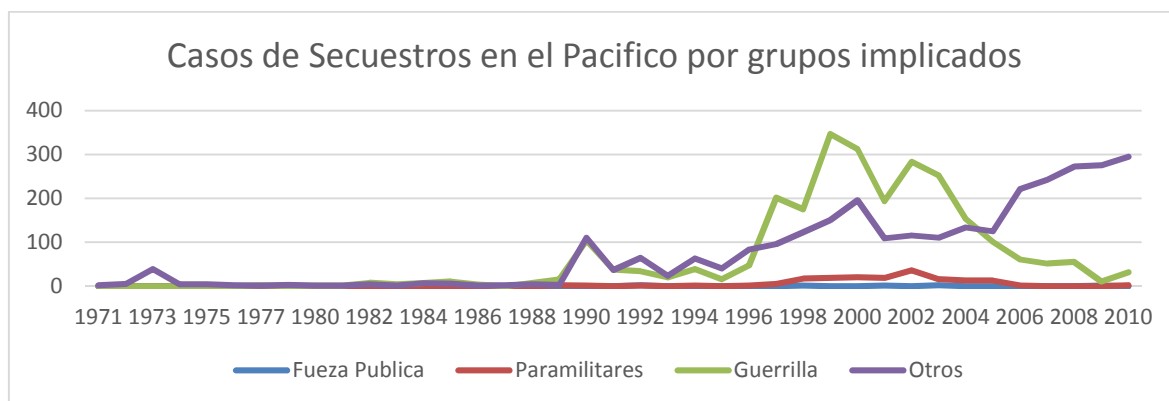


Ilustración 20. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Con el auge del narcotráfico en 1980, los primeros choques de violencia llegan al pacífico colombiano junto con plantaciones de coca e inversiones en minería (Efren, 2001), los corredores de narcotráfico buscan salidas al pacífico, particularmente en los territorios indígenas del putumayo, donde los cultivos de coca tuvieron un crecimiento significativo al ser una alternativa rentable para las pobres poblaciones de la región (Tenthoff, 2007). Paralelamente, en esta misma década comienzan a llegar los primeros planes de inversión social, por primera vez, la presión de algunos actores locales abre la posibilidad plantear el desarrollo de la infraestructura, planeación agrícola y cobertura de servicios.

En poco tiempo, el desarrollo trajo conflictos territoriales al Pacífico, las poblaciones que tradicionalmente poblaban la región debían organizarse para enfrentar la amenaza de perder los derechos de ocupación sobre la tierra que ocupan (Efren, 2001). La constitución de 1991 reconoce los derechos territoriales de las minorías étnicas, pese a ser un primer paso en la institucionalidad para proteger a las comunidades negras e indígenas de la región, las condiciones socioeconómicas del pacífico, sumadas a un acelerado proceso de modernización, ponen en conflicto los intereses de los diversos actores. Sin embargo, no es hasta 1995 que el conflicto tiene su auge en el pacífico de la mano del ejército y la guerrilla (Efren, 2001).

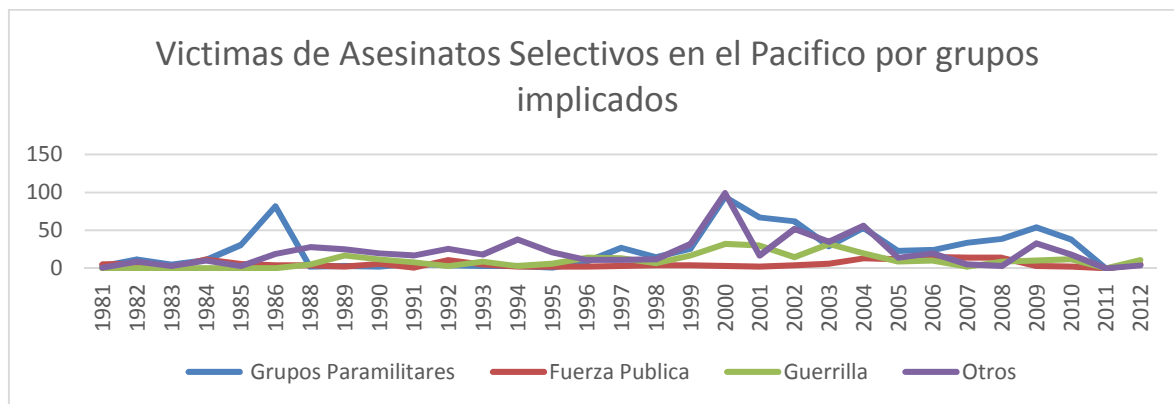


Ilustración 21. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

A partir de la segunda mitad de la década de 1990 se presenta un recrudecimiento de la guerra a nivel nacional, las estrategias de control territorial de las guerrillas desbordan la capacidad de respuesta del Estado, y el auge del paramilitarismo implica una fuerte ofensiva en los territorios controlados por la guerrilla sin hacer una clara discriminación entre población civil y grupos insurgentes. En este contexto, el norte del Choco, conocido como Urabá chocoano, que era tradicionalmente un punto de paso para las guerrillas, se convierten en territorios estratégicos para comunicarse con el interior del país y Panamá para el comercio ilegal (Efren, 2001). Los grupos guerrilleros comienzan como actores externos, pero pronto ganan simpatizantes en la región y, utilizando el discurso revolucionario y la reivindicación de los derechos para las minorías étnicas, pronto logran reclutar pobladores locales.

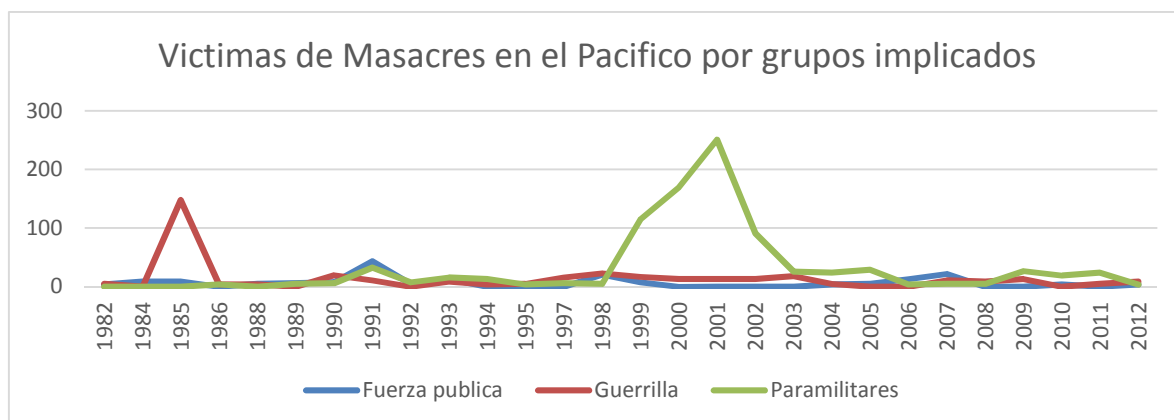


Ilustración 22. Fuente: Elaboración propia con base en datos del Centro de Memoria Histórica

Pese a que los enfrentamientos entre las FARC Y el ELN incrementan los índices de violencia, estos solo alcanzan su auge en la región con la llegada de los paramilitares a la región, solo entre 1996 y 1997 se registran 15.000 desplazados, se realizan masacres y asesinatos selectivos, con el agravante de que varios actos de violencia no se realizaron para combatir la insurgencia, sino para despojar a las poblaciones de su territorio (Garcia, 2013). Al igual que en otras regiones del país, el control territorial se aprovechó para el desarrollo de actividades de financiamiento, como la explotación maderera, el cultivo de palma, la extracción de oro y el narcotráfico (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016).

De nuevo, la débil institucionalidad estatal permitió el desarrollo de mercados ilegales, los casos de extorción pasaron a ser casos de corrupción, y las industrias ya desarrolladas pasaron a vincularse con grupos al margen de la ley. Los cultivos de palma fueron introducidos simultáneamente con el auge del paramilitarismo a comienzos de la década del 2000, cuando los altos índices de desplazamiento afectaron particularmente a comunidades negras (Garcia, 2013), sin embargo, con el incremento de la explotación del oro, la minería ilegal se desarrolló como alternativa a las fuentes de financiamiento, al ser un recurso “saqueable” de mayor rentabilidad.

En poco tiempo el Choco se consolidó junto con Antioquia como uno de los departamentos de mayor extracción de oro en el país (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016). En sus comienzos, los grupos armados ilegales realizan el cobro de cuotas de seguridad a las compañías que realizan la exploración de yacimientos, pero una vez detectado un yacimiento de oro, los grupos armados se apropiaron de la extracción de manera artesanal, paradójicamente, el desarrollo de la minería ilegal por parte de grupos ilegales, representa menores índices de desplazamiento, puesto que la extracción requiere de bastante mano de obra disponible, pero mayores índices de asesinatos selectivos y tácticas de terror para amedrentar a la población civil (Rettberg & Ortiz-Riomalo, 2016).

A partir del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares, en los corredores de narcotráfico del pacífico se han concentrado gran parte de las bandas criminales y guerrilla, particularmente en el norte de Nariño y sur del Cauca que son consideradas una región estratégica que comunica al narcotráfico desde el putumayo y Meta hacia Panamá y rutas de tráfico internacional. Para 2011 Cauca y Nariño se habían consolidado como el corazón de las confrontaciones entre e El Ejército Nacional y las Guerrillas (Nuñez, 2012).

4. Objetivos

Objetivo General

Analizar el nivel de capital social y confianza institucional en diferentes regiones de Colombia, considerando los resultados de la Herramienta BARCAS aplicada en 2005 y 2011, contrastándolo con los índices de violencia ocasionados por el conflicto que sufre el país.

Objetivos específicos

Describir a nivel regional los niveles de capital social, confianza institucional y violencia, para comparar los cambios que estos han tenido en los momentos estudiados

Comparar los niveles de capital social y violencia a nivel regional para describir una posible relación

Esclarecer el papel del estado en la construcción del capital social a través de la relación entre las variables capital social y confianza institucional.

Explicar a través de la relación entre capital social y confianza institucional, el papel del Estado en la creación, protección o destrucción de capital social en las regiones en conflicto.

5. Metodología

Este trabajo busca establecer una comparación entre diversas regiones del país atravesadas por el conflicto, para analizar su impacto sobre los componentes del capital social y la incidencia que ha jugado el desempeño de las instituciones públicas. En este sentido, el propósito de este trabajo de investigación es responder a la pregunta: ¿Cómo se desarrolla la dinámica de violencia y capital social desde la perspectiva de la evolución de la confianza institucional?

Para lo cual, se utilizó una metodología de variables instrumentales, partir de mediciones del índice de capital social BARCAS, para analizar la relación entre el conflicto, su impacto sobre los componentes del capital social, y la confianza en las instituciones en Colombia. La variable dependiente será la acumulación o destrucción de capital social, explicada por la variable dependiente, los actos de violencia asociados al conflicto, donde el instrumento es la confianza institucional. Se propone el siguiente modelo:

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 C_{it} + U_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Donde K_{it} se refiere a la diferencia en el cálculo del índice de Capital Social para el municipio i en el periodo t . Por otro lado, C_{it} se refiere a cualquier acto del conflicto que afecte directamente a la población civil en el municipio i en el periodo t , es decir, el registro de masacres, homicidios selectivos, ataques a la población civil, casos de secuestro, Atentados terroristas, Civiles muertos en acciones bélicas, Víctimas de minas antipersona, y daños a bienes civiles (infraestructura privada y pública); para hacer comparables los datos, todas las tasas se han transformado a actos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, C_{it} se refiere al índice de confianza institucional municipio i en el periodo t , diseñado para ser una medida de eficacia institucional independiente a los factores que conforman el índice de Capital Social según la metodología Barcas.

Finalmente, se utiliza la metodología de efectos aleatorios dado que la relación entre Capital social y conflicto se asume independiente, debido a la complejidad de este fenómeno y las diferentes variables que lo afectan, y se puede asumir que las diferencias entre municipios tienen un efecto en la variable dependiente; Esta metodología permite el uso de variables que son constantes en el tiempo, pero precisas para incluir la importancia de las características propias de los municipios con la presencia de conflicto, es decir, distancia

geográfica de la capital departamental; es importante mencionar que, debido a la falta de información, la pobreza también debió ser incluida como un fenómeno constante, por lo tanto, las estimaciones de este trabajo no consideran cambios en los índices de desigualdad, este sesgo de variable omitida. De manera que, U_{it} representa el error de estimación entre municipios, mientras que ε_{it} es el error de estimación de un municipio en particular. En el anexo 6 se presenta un Test de Hausman, cuya hipótesis nula es que se prefiere un modelo de efectos aleatorios, es decir que, los errores U_{it} están correlacionados con los regresores, en este caso, no se puede descartar esta hipótesis.

Debido a la naturaleza compleja del conflicto es inevitable encontrar problemas de endogeneidad y variables omitidas, por esta razón es común el uso de variables instrumentales (Durán I. M., 2011). El problema de la ecuación (1) es que compara niveles de Capital Social en municipios de acuerdo a su nivel de conflicto y confianza institucional, de manera que asume cambios en capital social proporcionales a los cambios en conflicto y confianza institucional, y excluye otros factores relevantes. Por otro lado, resulta complejo argumentar que las variaciones en el capital social son causadas por el nivel de conflicto, y no al contrario. Para contrarrestar estos problemas de endogeneidad y variables omitidas se propone la siguiente variable instrumental:

$$C_{it} = \beta_0 + \beta_1 P_{it} + I_{it} + P_{it} + D_{it} + U_{it} + e_{it} \quad (2)$$

$$K_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta C_{it} + \beta_2 \Delta C_{it} + U_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Donde P_{it} se refiere al producto interno bruto para el municipio i en el periodo t , I_{it} se refiere al total de inversión pública del municipio i en el periodo t , en temas como: educación, centros de reclusión, fortalecimiento institucional, promoción del desarrollo, servicios públicos, cultura, agropecuaria, salud, vías, etc. Por otro lado, como variables constantes se encuentran, P_{it} , que se refiere al porcentaje total de pobreza para el municipio i , y D_{it} se refiere a la distancia lineal de la capital del departamento al cual pertenece el municipio i , como se mencionó anteriormente, por falta de datos es necesario tomar la tasa de pobreza como constante. Estos instrumentos fueron escogidos al tener una alta relación con el conflicto, de acuerdo al trabajo de Rubio (2002)

De manera que la ecuación (3) analiza la relación entre capital social y confianza institucional, al considerar características municipales como variables instrumentales, se asume que no existe relación entre la pobreza, ingresos, inversión, o distancia de un

municipio, respecto a los niveles de solidaridad y cooperación; y que, en concordancia con el trabajo de Coleman (1988), el Capital Social es una característica neutral de los grupos sociales que nace de las estrategias individuales de interacción, por lo tanto no varían entre municipios, sino entre individuos. Por otro lado, como lo menciona el trabajo de Putnam (1993), las instituciones tienen un efecto indirecto en el Capital Social, en la medida en que facilitan la interacción descrita por Coleman, incluso, se espera que dos individuos de la misma región tienen mayor probabilidad de tener capital social similar que dos individuos de diferentes regiones (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013), por esta razón es pertinente trabajar con promedios municipales. Por otro lado, dada la forma en que está construido el índice de Confianza institucional, esta es una variable independiente que se aproxima a una medida de eficacia institucional (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013), ya que la confianza institucional o se ve afectada por los niveles de solidaridad, reciprocidad, y cooperación; no es necesario encontrar instrumentos para esta, aunque cabe resaltar que la eficacia institucional es también influenciada tanto por el conflicto en sí mismo, como las variables territoriales que lo afectan.

5.1 Datos

La información relacionada a Capital Social y Confianza institucional se obtiene a través de los índices de capital social desarrollados mediante el instrumento de medición: Barómetro de Capital Social (BARCAS) realizados a nivel nacional en 1997, 2005 y 2011, y su posterior análisis elaborado en el informe: “Las Vicisitudes del Capital Social de Colombia (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). Por otro lado, los indicadores de violencia directamente relacionada al conflicto interno colombiano, son utilizados según se encuentran en las bases de datos del Centro de Memoria Histórica, es decir, en términos de actividad armada, homicidios, secuestros, y masacres. Mientras que las variables regionales se obtienen del Departamento Nacional de Planeación.

La metodología BARCAS se realizó en 57 municipios de 27 departamentos, seleccionando las capitales y ciudades principales de cada departamento, más otros municipios seleccionados al azar. De estas poblaciones se seleccionó una sub-muestra aleatoria de acuerdo a los criterios de cuotas de la población colombiana por género y edad, basadas en proyecciones para el 2011 según estimaciones del DANE (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). El uso de la herramienta BARCAS es además pertinente, porque las mediciones se

realizaron transversalmente durante los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, por lo tanto, los datos reflejan situaciones distintas en el desarrollo de la política nacional, y muestran su repercusión en el desarrollo de las instituciones estatales

Las mediciones del instrumento BARCAS no solo consideran los aspectos fundamentales del capital social, como confianza interpersonal, solidaridad, y normas de reciprocidad; también hace mediciones factores correlacionados, particularmente la confianza institucional. Sin embargo, el cambio estructural en la construcción de estos factores hace que solo sea posible la comparación entre las mediciones de 2005 y 2007 (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013).

Para la medición de estos factores, la herramienta BARCAS organiza las variables en diez dimensiones:

1. Solidaridad y Mutualidad: mide si las relaciones entre las personas son cooperativas y recíprocas en lugar de oportunistas. Incluye un sentido negativo de exclusión social. Se mide en las variables de: Solidaridad, Manejo del conflicto, Reciprocidad, Atomización (–), Oportunismo (–), Alienación (control interno vs. externo) (–)
2. Relaciones Horizontales: se centra en la ayuda y la solución de problemas colectivos o comunes entre semejantes. Incluye la realización de actividades sociales. Medida en las variables de: Solidaridad en las relaciones horizontales, Actividades sociales con los del trabajo, Actividades sociales con los del vecindario, Solución horizontal a problemas colectivos, Aplicación por agente externo (–)
3. Jerarquía o Articulación Vertical: Hace referencia a las instituciones que vinculan centro con periferia de una sociedad. Se compone de las variables: Pertenencia a organizaciones de interés, Solidaridad vertical, Solución vertical a problemas colectivos, Hace mediación Iglesia, Hace mediación gremios o asociaciones profesionales, Hace mediación sindicatos, Hace mediación partidos políticos
4. Participación Política: medida respecto a: Habilidades políticas, Mecanismo de participación, Votación, Eslabonamiento legislativo, Eslabonamiento ejecutivo, Actividades políticas, Partidos
5. Participación Cívica: mide la membresía a organizaciones voluntarias seculares de la sociedad civil: Pertenencia a organizaciones voluntarias seculares, Actividades localidad, Actividades cívicas, Actividades medios, Trabajo voluntario
6. Confianza Institucional: mide la percepción de los ciudadanos respecto a la eficacia de las instituciones para resolver los problemas de la sociedad: confianza en el

- Gobierno, Confianza en los movimientos, Confianza en los medios, Confianza en las Fuerzas Armadas, Confianza en los grupos, Confianza legal, Confianza política, Confianza en la Iglesia, Confianza en la educación, Confianza en la Policía, Confianza en las grandes compañías, Honestidad y cumplimiento de la Ley, Percepción de corrupción (-)
7. Control Social: Se comprende del conocimiento y uso de los mecanismos de participación que permiten hacer control al Estado, la confianza en las instituciones que ejercen control sobre el Estado, y la rendición de cuentas: Confianza en las instituciones que controlan el Estado, Mecanismos de participación de control de la sociedad al Estado, Rendición de cuentas (*accountability*)
 8. Información y Transparencia: mide la percepción en cuanto a calidad y suficiencia de la información ofrecida por diversas fuentes: Los colombianos no saben para dónde va el país porque nadie les informa (-), La gente tiene quien les explique los problemas públicos, El Estado se esfuerza por informar a los ciudadanos, Los medios de comunicación explican a fondo los problemas, Los ciudadanos se informan para poder participar, Sabe en qué se van a invertir los recursos de su localidad/comuna
 9. Republicanismo Cívico: Mide la responsabilidad ciudadana por lo público, politización y educación política: Educación política, Politización de la ciudadanía, Responsabilidad de lo público, Particularismo (-), Clientelismo (-)
 10. Medios: Mide el impacto de los medios de comunicación en la formación y acumulación de capital social. Incluye: Confianza en los medios, Actividad en los medios, Los medios de comunicación explican a fondo los problemas públicos, Actividad leer (consultar el periódico)

A estas Diez dimensiones, la metodología empleada en BARCAS realizó un análisis factorial para ser agrupadas en los factores de Capital Social (Ksocial), confianza institucional y Control Indirecto del Estado(Confie), y Fe en Fuentes de Información no Validadas (Fenoal). Para la construcción de los índices regionales utilizados en este trabajo, se realizó una suma ponderada del valor de cada dimensión multiplicada por su coeficiente beta estandarizado (de acuerdo al análisis factorial):

Capital social (K Social): Solidaridad y Mutualidad (0,4669), Relaciones Horizontales (0,4867), Jerarquía (0,2938), Medios (-0,264)

Confianza institucional y control indirecto del estado (Confie): Control Social (0,4465), Participación Política (0,3995), Participación Cívica (0,3312), Confianza Institucional (0,2315), Información y Transparencia (0,2484), Republicanismo Cívico (-0,1612)

Es importante mencionar que casi el 90% de los cambios en el factor de K Social se encuentra explicado en la dimensión de solidaridad y mutualidad. Los cambios en las demás dimensiones no cuentan con suficientes variaciones para contribuir con explicaciones más significativas de este factor (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). Así mismo, un 90% de los cambios en Confie Institucional se encuentran explicados por las dimensiones de Control social y confianza institucional.

Así mismo, es importante considerar que el uso de la herramienta BARCAS propone ciertos problemas de endogeneidad al modelo, pues todas las dimensiones y variables tienen algún impacto en todos los factores analizados, particularmente sobre las relaciones horizontales que son un determinante de la confianza en las instituciones (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013), pero a su vez son definitivos de la construcción de capital social (Adler, 2002). Este problema es más persistente en el caso particular de las instituciones militares, toda vez que este relaciona la variable dependiente (capital social) con la variable de control (conflicto) y la variable de Estado (confianza institucional), a pesar de que estas variables deben ser independientes, las instituciones militares se presentan transversalmente en los ámbitos mencionados, lo que puede presentar un problema metodológico

Por otro lado, los registros de violencia relacionada al conflicto, únicamente aquellos que victimizan directamente a la población civil, y se excluyen encuentros militares o entre grupos armados ilegales: Atentados terroristas, Masacres, Civiles muertos en acciones bélicas, Daños a bienes civiles, Ataques a poblaciones, Asesinatos selectivos, y Secuestros. Estos se presentan según las bases de datos del Centro de Memoria Histórica, agrupados a nivel municipal y temporal, y en tasas según cada 100.000 habitantes, de esta manera se resalta la diferencia en el impacto de actos de violencia en municipios con menor población respecto a actos violentos en grandes urbes como las capitales departamentales.

Para los registros de Atentados Terroristas, este fenómeno se definió como cualquier ataque indiscriminado perpetrado con explosivos contra objetivos civiles en lugares públicos. Por otro lado, los registros de Masacres, se entienden como el homicidio intencional de cuatro o más personas en estado de indefensión y que se distingue por la exposición pública de violencia. Secuestros se entiende como la privación ilegal de la

libertad e contra de la voluntad de la víctima, solo se registran los casos de secuestro como toma de rehenes, pesca milagrosa y trata de personas, por lo que un caso podría afectar a más de una persona. Asesinatos Selectivos se entienden como el homicidio intencional de tres o menos personas en estado de indefensión. Por el contrario, Civiles Muertos en Acciones Bélicas Es el homicidio de civiles en el desarrollo de acciones bélicas propias del conflicto armado como consecuencia de la violación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, el recurso a métodos y medios ilícitos, y la prevalencia del imperativo militar sobre el principio humanitario de protección de la población civil. Ataques a poblaciones se entiende como una incursión que implica la ocupación transitoria de un territorio y una acción militar continuada dirigida hacia el arrasamiento de un objetivo militar dentro de un casco urbano. Por definición, todos los actos de violencia registrados son perpetrados por grupos armados identificados, o existen indicios de la participación de estos, a su vez se excluyen ataques contra objetivos militares, entidades bancarias, infraestructura (energética, vial o de comunicaciones).

Para el desarrollo de este modelo solo se incluirán los 57 municipios encuestados en la herramienta BARCAS que se presentan en el anexo 1. Como se mencionó anteriormente, se agruparon los actos de violencia registrados entre 1997-2005 y 2006-2011, es decir, los periodos de recrudescimiento y reacomodamiento del conflicto, para finalmente desarrollar el modelo de variables instrumentales. Finalmente es importante destacar que, se trabaja con datos estandarizados de conflicto (es decir tasas por cada 100.000 habitantes) y promedios de Capital Social municipales, para hacer comparables las variables y hacer equivalentes los choques de violencia, esto es, reconociendo que los municipios pequeños tienen mayor colusión, y un mismo acto de violencia afecta más el capital social en una población pequeña que en los grandes centros urbanos donde los grupos sociales son más dispersos.

6. Resultados

Para corroborar la robustez de los resultados se estimaron tres modelos, primero una regresión de Mínimos Cuadrados en dos Etapas con Efectos Variables (EV), seguido de una regresión de Mínimos Cuadrados en dos Etapas con Efectos Fijos (EF), y finalmente de una regresión sobre las diferencias entre los dos periodos estudiados, utilizando únicamente Mínimos Cuadrados en 2 Etapas (MC2E). Al realizar este segundo modelo, la resta de todas las variables menos su valor en el periodo anterior elimina el efecto de las variables fijas, y al no seguir la metodología de datos panel, analiza exclusivamente los cambios en las variables entre los dos periodos estudiados, es decir:

$$\Delta C_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta P_{it} + \Delta I_{it} + e_{it} \quad (4)$$

$$\Delta K_{it} = \beta_0 + \beta_1 \Delta C_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

Las diferencias entre estos tres modelos presentan evidencia de la relación entre los efectos fijos en los cambios temporales de las variables estudiadas, y cuyos resultados se presentan en la tabla 1.

Tabla 1: Resultados del efecto de la confianza institucional y el conflicto sobre el capital social

Variables	MC2E	Modelo	
		EF	EA
Primera Etapa			
PIB Municipal	2.19e-06 (7.56e-06)	7.63e-06 (9.10e-06)	4.82e-06 (4.01e-06)
Inversión Pública total	1.34e-07 (1.05e-07)	-7.91e-08 (1.17e-07)	-8.10e-08 (7.19e-08)
Distancia a la capital Departamental		0	0.477 ** (0.2326329)
Pobreza		0	2.829*** (.9742251)
Confianza Institucional	-4.558976 (3.505878)	6.297** (3.413859)	2.900 (2.459813)
Segunda Etapa			
Constante	-5.303225 (4.76745)	4.362 (10.46924)	2.480 (3.367799)
Conflicto	0.0241601 (0.0257833)	0.072 (0.0830139)	0.0175*** (0.0083703)
Confianza Institucional	0.2730734 (.1898492)	-0.0021002 (0.5758984)	0.274** (0.1049314)
R^2			0.2267

Nota: Los errores estándar están incluidos entre paréntesis. * es significativo a un 90%, ** es significativo a un 95%, y *** es significativo a un 99%

El modelo MC2E presenta coeficientes poco significativos para la primera etapa de la regresión, lo cual es coherente con las posturas que argumentan que los de ingresos no son suficientes para explicar la presencia de actos de violencia; por el contrario, el coeficiente positivo de la variable inversión pública presenta una muy débil evidencia de que el gasto público atrae al conflicto pues supondría una posibilidad de financiamiento, sin embargo, un coeficiente negativo para esta variable en los demás modelos sugiere que esta

es una relación espuria, para corroborar esta hipótesis habría que analizar los niveles de corrupción más a fondo.

En la segunda etapa se demuestra, sin gran nivel de significancia, una relación positiva entre confianza institucional y capital social; pero resulta más interesante encontrar un coeficiente positivo para el impacto del conflicto, puesto que sugiere que los actos de violencia no tienen una relación inversa con el capital social, por el contrario, es evidencia de que los actos de violencia tienen un efecto secundario en la generación de solidaridad. En este sentido, el modelo EF obtiene resultados similares a los de MC2E, pese a que la metodología de datos panel permite obtener coeficientes más elevados, la mayoría de estos no son significativos, sin embargo, la poca calidad de estos dos modelos para explicar la relación en capital social podría deberse a variables omitidas

Por otra parte, el modelo EA presenta una considerable cantidad de variables significativas. En esta ocasión, la primera etapa demuestra un coeficiente negativo para la Inversión Pública respecto al conflicto, pese a no ser significativo, contradice lo encontrado en el modelo MC2E, y establece débilmente que la inversión en educación y el fortalecimiento institucional si tiene una relación inversa con el conflicto, a pesar de que un mayor ingreso municipal tiene una relación positiva con los actos de violencia relacionados al conflicto. Resulta mucho más interesante encontrar que existe significancia en las variables que se tomaron como efectos fijos, tanto los porcentajes de pobreza y la distancia tienen un impacto positivo en los actos de violencia atada al conflicto, pero las implicaciones de la distancia física a las capitales departamentales reflejan no solo las condiciones geográficas de aislamiento que padecen los municipios, a su vez suelen estar relacionadas con peor infraestructura, menor eficacia institucional y mayor corrupción.

El modelo EV demuestra nuevamente una relación positiva entre capital social y conflicto, esta vez con mayor significancia, y establece evidencia de que el conflicto en Colombia despierta solidaridad; por lo tanto, la construcción de Capital Social podría ser viable para la reintegración del tejido social, es decir, existe resiliencia social ante los actos de violencia. Por otro lado, la variable de distancia física a la capital departamental juega un papel significativo, puesto que esta variable se asocia a menores niveles de institucionalidad, mayor complejidad geográfica y mayor conflicto; la tabla de correlaciones (ver anexo 5) soporta evidencia de estas relaciones, pero agrega una correlación positiva con los niveles de capital social. De igual manera, la Confianza institucional demostró una relación positiva

con coeficientes significativos, y un R^2 cercano al 22% y una prueba Chi demuestran la correcta especificación del modelo (ver anexo 8).

Finalmente, los modelos MC2E y EF demuestran que la ecuación (1) no es apropiada para explicar las variaciones temporales del Capital Social. Solo cuando se consideran variables constantes dentro del modelo EV gran parte de los coeficientes obtiene un mayor nivel de significancia, en este caso, con la inclusión de unas pocas características regionales. Lo que sugiere que la ecuación (1), es decir, el capital social expresado como una relación del conflicto y la confianza institucional, es significativo solo para explicar los niveles de capital social entre regiones. Esta falta de calidad explicativa del modelo puede deberse a dos razones: Cambios estructurales en la construcción del Índice de capital Social (K_{social}), o la omisión de una variable que capture las tendencias de Capital Social en el tiempo.

Como se mencionó anteriormente, la construcción del índice de capital social se hace multiplicando dimensiones de solidaridad, reciprocidad, etc. por los respectivos coeficientes obtenidos de un análisis factorial para el año 2011. Esta metodología podría presentar un sesgo en el modelo, puesto que, la conclusión del análisis factorial para 2011 es que el 90% de las variaciones en capital social están explicadas por la dimensión de solidaridad (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). De manera que, asumir que existe una relación positiva entre K_{social} y Conflicto, supone asumir que la variable más afectada es la de solidaridad. Sin embargo, no es posible concluir que, para 2005, la dimensión de solidaridad fue la que mejor explica los cambios en K_{social} . Pese a esto, manejar la misma proporción para los años estudiados facilita la comparación de estos índices, aun cuando esta metodología pueda sesgar los índices.

7. Conclusiones

A nivel general, tanto los índices de violencia como los índices de capital social y confianza institucional han caído entre los periodos de recrudecimiento y reacomodamiento del conflicto, es decir 1997-2005 y 2006-2011. Por esta razón, encontrar una variable que explique significativamente las variaciones temporales de capital social no es una tarea sencilla, puesto que se están comparando dos conflictos diferentes.

Como se ha mencionado anteriormente, el periodo de recrudecimiento se destaca por los altos niveles de violencia; es una época en que el crecimiento del narcotráfico financiaba a plenitud el escalamiento del conflicto (Gutierrez & Barón, 2008), donde prosperaron diferentes tácticas del terror como formas de control territorial, principalmente el secuestro, las masacres, y los asesinatos selectivos, eran las herramientas con las que los grupos armados ilegales buscaban establecer su control territorial o ejercer presión política.

En contraste, el periodo de reacomodamiento se caracteriza por una disminución significativa de los índices de violencia, la desmovilización de 25.000 hombres armados pertenecientes a las AUC, y las etapas exploratorias de los diálogos de paz con las FARC. No obstante, la explotación de oro, y los cultivos de palma africana habían sido la causa de miles de desplazamientos y masacres por parte de los grupos paramilitares durante el periodo de recrudecimiento del conflicto, la permanencia de estos mercados ilegales incitó la disidencia en el proceso de desmovilización que facilitó el auge del Neo-paramilitarismo (Durán, Vásquez, & Loaiza, 2011). Entonces, aún en el periodo de reacomodamiento los grupos Neo-paramilitares continuaron ejerciendo el control territorial, que, al haber sido previamente establecido, no requirió de un nuevo escalamiento de los niveles de violencia.

Estos cambios en las tácticas de violencia representan un cambio estructural que no es captado por la variable de conflicto utilizada en este trabajo; es decir que, el impacto sobre el capital social de un secuestro con fines políticos puede diferir bastante de un homicidio selectivo usado para establecer fronteras entre grupos ilegales. Al mismo tiempo, desde 2002 el periodo de recrudecimiento se caracteriza por la implementación de las políticas de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, las cuales significaron un incremento significativo del gasto en defensa para establecer uso de la coerción como estrategia de seguridad, pero a costa de captar recursos necesarios para el fortalecimiento institucional

y la solución de los problemas socioeconómicos que justifican la insurgencia (Gudmundsson, 2004). Con el cambio de presidente, paulatinamente se estableció dialogo como estrategia para buscar establecer la seguridad y lidiar con la insurgencia. Estos cambios en políticas públicas también consisten cambios estructurales no captados en la construcción del índice de confianza institucional, y junto a los cambios en las tácticas de violencia, dificultan la comparación temporal de los índices de capital social realizado en este trabajo, pero que podrían ser corregidos mediante la construcción de mejores índices, o el uso de un mejor instrumento que se relacione con los cambios temporales de estas variables.

A pesar de las limitaciones en el análisis entre periodos de violencia, el análisis interregional del capital social puede ser muy bien explicado desde las variables de conflicto y confianza institucional. En concordancia con los hallazgos de Blattman et al (2011) al existir una relación positiva entre conflicto y capital social no es posible hablar de causalidad, toda vez que la violencia es utilizada como una herramienta de desestabilización de la sociedad civil con el propósito de establecer el control territorial de los grupos armados ilegales. En este caso, en términos de Sarasvathy (2001), la solidaridad es efectuada por la violencia, es decir, que el conflicto no tendría ningún nivel predictivo sobre la solidaridad puesto que esta es una externalidad inesperada. Finalmente, dado que la solidaridad es la principal dimensión en la construcción de capital social (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013), es de esperar que este último se vea afectado positivamente por los cambios en los niveles de solidaridad, sin embargo, no se puede descartar un posible efecto negativo del conflicto sobre otras variables que también componen al capital social, como la reciprocidad o confianza interpersonal, incluso, no se pueden descartar la posibilidad de que estas variables sean más significativas para la construcción de capital social que la solidaridad, y que este fenómeno no sea captado por la forma en que está construido el índice de capital social.

Por otro lado, Es importante destacar las características regionales como variables que afectan el conflicto y el capital social, especialmente aquellas asociadas a niveles de desigualdad y eficacia institucional. Si bien, los grandes centros urbanos, como capitales departamentales, pudieron haber registrado caídas en el índice de capital social, la dispersión de los grupos sociales en estos lugares de mayor población reduce el impacto de los actos de violencia, al contrario de a una población más pequeña, pero donde los individuos tienen interacciones más estrechas, un acto de violencia similar tendría mayor

impacto a corto y largo plazo. De forma tal que, los municipios aislados, con menor población, mayor pobreza, mayor afectación por el conflicto, y menor eficacia institucional, presentan mayores niveles de capital social (ver tabla de correlaciones en anexo 5). En concordancia con el trabajo de Blattman et al. (2011), esto puede ser evidencia de como la victimización incita a la movilización política.

El caso de Boyacá y las olas históricas de crimen presenta evidencia de como la violencia puede ser un incentivo de las partes involucradas para colaborar en alcanzar seguridad y orden, al mismo tiempo que, el conflicto también impulsa al Estado para fortalecer las instituciones en la periferia. En este caso, la solidaridad surge de la necesidad de establecer seguridad y un orden social, a través del tiempo esta se convierte en reciprocidad; al sumarse los recursos disponibles por la extracción esmeraldera, la región fue capaz de establecer un sistema de control lo suficientemente fuerte como para repeler al paramilitarismo en su auge y mantener significativamente bajos los niveles de conflicto (Gutierrez & Barón, 2008). Sin embargo, la creación de tales instituciones fue un proceso de largo tiempo, que involucro diferentes acuerdos entre las familias de la región y con el gobierno, para que finalmente se formalizara la extracción esmeraldera y se institucionalizaran los mecanismos de articulación social.

Debido al largo proceso de recuperación, este mismo fenómeno no se evidencia en otras regiones del país que incluso han sido más afectadas por la violencia. La región del pacifico colombiano simplemente carece de recursos e instituciones para el ordenamiento civil, y el declive de la participación en organizaciones refleja uno de los principales retos de la confianza institucional (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013), y sin embargo, existen casos empíricos que evidencian un alto capital social en ciertos grupos, cuando víctimas y victimarios cooperan para solucionar los problemas socioeconómicos de la región (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). Paralelamente, Antioquia ha logrado disminuir en una norme proporción sus índices de conflicto, pese a ser el departamento más violento durante el periodo de recrudescimiento, y pese a auge del crimen común, el notable desarrollo institucional en la región es reflejado en los índices de confianza institucional (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). Finalmente, las regiones con presencia histórica guerrillera como Santanderes, Llanos Orientales y Orinoquia; también han logrado una disminución significativa en los índices de violencia, a pesar de que las guerrillas y grupos neo-paramilitares se mantienen activos en la región, en parte gracias a los diálogos de paz y la falta de rivalidad con otros grupos armados (Avila, 2012).

Finalmente, la metodología utilizada presenta evidencia, a diferentes niveles de significancia, de cómo las instituciones Estatales juegan un papel importante en el desarrollo del capital social, y como, en el caso particular del conflicto, facilitan la confianza interpersonal a nivel regional. No obstante, el detrimento general de los índices de confianza entre los periodos estudiados puede ser una explicación viable para la baja calidad de las explicaciones temporales del capital social. En este sentido es necesario analizar la evolución de la confianza institucional contrastando los municipios más afectados por la guerra y los grandes centros urbanos, esto es considerando el papel significativo que tuvo la variable instrumental de distancia física a la capital departamental, su correlación positiva con las variables conflicto y pobreza, y negativas con PIB municipal e inversión total. Así mismo, en futuros estudios será necesario descomponer la variable de confianza institucional de acuerdo al tipo de instituciones, y analizar el distinto impacto que sobre el conflicto pueden tener las instituciones del sistema legal, instituciones políticas, militares, y educativas.

De manera similar al índice de capital social empleado para este trabajo, el índice de Confianza institucional (Confie) se encuentra en su mayoría explicado por las variables de control social, participación política, y confianza institucional (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013). De esta manera, la relación de confianza no se da en un solo sentido desde las instituciones hacia la sociedad civil, también considera la capacidad de la sociedad para controlar e influir en las instituciones. En este sentido, gran parte del declive en el índice de confianza institucional entre los periodos estudiados se encuentra explicado en el detrimento de la participación cívica y la caída en la confianza en el sistema legal a nivel nacional (Hurtado, Garcia, & Copete, 2013); estos cambios exógenos pueden obedecer a variables no estudiadas, relacionadas a las limitaciones y desafíos de la institucionalidad en Colombia. Como se mencionó anteriormente, la omisión de estas variables ayuda a explicar la baja calidad predictiva del modelo empleado cuando se analizan diferentes periodos; pero, un análisis regional desde la perspectiva del estudio de Blattman et al. 2011, sugiere que la victimización genera una respuesta de movilización política, lo que es coherente con los resultados de Hurtado et al. (2013) quienes afirman que la participación política es la variable que mayor crecimiento positivo ha tenido dentro del índice de confianza institucional empleado en este estudio desde 1997, sin embargo, en proporción a las demás variables, aporta poco para la construcción de confianza institucional, y su efecto positivo se ve diluido en las tendencias negativas del control social y la confianza por las instituciones legales.

Finalmente, el capital social es solo una herramienta más dentro de la amplia variedad de opciones que un individuo dispone para coordinar sus recursos, ante la ausencia de capital financiero o físico, un individuo puede recurrir a sus redes sociales para procurar los medios necesarios en el logro de sus objetivos; en el contexto del conflicto, este estudio argumenta que la violencia es un incentivo que lleva a los individuos a solucionar los problemas de seguridad y orden social. En este sentido, las investigaciones a futuro deberán enfocarse en el aspecto microeconómico, y analizar las preferencias individuales y grupales que llevan a los individuos a construir capital social en torno al problema común de la violencia.

8. Bibliografía

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. *American Economic Review*, 1369–1401.
- Acosta, J. D. (2013). *ANÁLISIS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO DESDE UNA APROXIMACIÓN TERRITORIAL. ESTUDIO DE CASO: EXPLOTACIÓN MINERA Y DINÁMICAS DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN DEL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO*. Bogota: Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Trabajos de Grado Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
- Adler, P. S.-W. (2002). Social capital. Prospects for a New Concept. *Academy of Management Review*, 17-40.
- Annan, J., Blattman, C., Mazurana, D., & Carlson, K. (2008). Civil War, Reintegration, and Gender in Northern Uganda. *The Journal of Conflict Resolution*, 877-908.
- Arefi, M. (2003). Revisiting the Los Angeles Neighborhood Initiative (LANI): Lessons for Planners. *Journal of planning education and research*, 384-399.
- Arias, A. F., & Ardila, L. (2003). *MILITARY EXPENDITURE AND ECONOMIC ACTIVITY: The Colombian Case*. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Credito Publico.
- Avila, A. (2012). Las FARC: la guerra que el país no quiere ver. *Arcanos, Corporación Nuevo Arcoiris*, 36-59.
- Axelrod, R. M. (1984). *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books, Inc.
- Blattman, C., & miguel, E. (2010). Civil War. *American Economic Association*, 3-57.
- Bodea, C., & Elbadawi, I. (2008). Political Violence and Economic Growth. *Policy Research Working Paper*.
- Centro Nacional de Memoria Historica. (2013). *¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad*. Bogota: Imprenta Nacional.

- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 95-120.
- Collier, P. (2006). Economic Causes of Civil Conflict and their Implications for Policy . *Oxford University*.
- Collier, P., & Hoeffler, A. (2007). Civil War. En T. Sandler, & K. Hartley, *Handbook of Defense Economics, Defense in a Globalized World* (págs. 711–739). Department of Economics, University of Oxford, UK.
- Durán, I. M. (2011). Conflicto Armado y Crecimiento Económico Municipal en Colombia. *Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Maestría en Ciencias Económicas, Bogotá D.C., Colombia*.
- Durán, J., Vásquez, I., & Loaiza, R. (2011). Influencia de la ganadería, la minería y la presencia de cultivos de coca y grupos armados ilegales sobre el desplazamiento forzado en Colombia en 2011. *Magazín Empresarial*, 11-17.
- Efren, C. (2001). El Pacífico colombiano: de "remanso de paz" a escenario estratégico del conflicto armado. *Cuadernos de desarrollo rural*, 7-37.
- Elbadawi, I. A. (2008). Postconflict Transitions: An Overview. *THE WORLD BANK ECONOMIC REVIEW*, 1-7.
- Espinosa, N., & Valderrama, D. (2011). Pasos metodológicos para el análisis cuantitativo y cartográfico del conflicto armado en Colombia Un estudio de caso. *Estudios Políticos*, 39.
- Fergusson, L., Romero, D., & Vargas, J. (2014). *THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF CIVIL CONFLICT: THE DEFORESTATION EFFECT OF PARAMILITARY EXPANSION IN COLOMBIA*. Bogota: SERIE DOCUMENTOS DE TRABAJO, Universidad del Rosario, Facultad de Economía.
- Flores, E., & Nooruddin, I. (2009). Democracy under the Gun: Understanding Postconflict Economic Recovery. *The Journal of Conflict Resolution*, 3-29.

- Foley, M., & Edward, B. (1998). Beyond Tocqueville: Civil Society and Social Capital in Comparative Perspective: Editors' Introduction. *American Behavioral Scientist*, 5-20.
- Fred-Mensah, B. K. (2004). Social Capital Building as Capacity for Postconflict Development: The UNDP in Mozambique and Rwanda. *Global Governance*, 437-457.
- Gáfaró, M., Ibañez, A. M., & Justino, P. (2014). *Collective Action and Armed Group Presence in Colombia*. Bogotá: Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico.
- García, P. (2013). Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción. *Estudios Socio-Jurídicos*, 209-244.
- González, C. (2011). *Petróleo y Transformación de Conflictos*. Bogotá: Indepaz.
- Granada, S. (2008). *Caracterización y contextualización de la dinámica del desplazamiento forzado interno en Colombia 1996-2006*. Bogotá: Documentos de CERAC.
- Gudmundsson, R. (2004). The Economics of Postconflict Countries: A Survey of the Literature. En J. A. Clément, *Postconflict Economics in Sub-Saharan Africa : Lessons From the Democratic Republic of the Congo* (págs. 62-87). Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Gutiérrez, F., & Barón, M. (2008). Ordenes Subsidiarios. Coca, Esmeraldas: La Guerra y la Paz. *Colombia Internacional*, 102-129.
- Hanifan, L. J. (1916). The rural school community center. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 130-138.
- Hurtado, D., García, D. M., & Copete, A. F. (2013). *Las Vicisitudes del Capital Social de Colombia*. Bogotá: Fundación Restrepo Barco.
- Idrobo, N., Mejía, D., & Tribin, A. M. (2014). Illegal Gold Mining and Violence in. *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 83–111.
- Isaza, J. F., & Campos, D. (2008). *ALGUNAS CONSIDERACIONES CUANTITATIVAS SOBRE LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CONFLICTO EN COLOMBIA*.

- Isaza, J. F., & Campos, D. (2009). *Consideraciones Cuantitativas Sobre la Evolución Reciente del Conflicto*. Bogotá: análisis político.
- Knight, M., Loayza, N., & Villanueva, D. (1996). The Peace Dividend—Military Spending Cuts and Economic Growth. *Staff Papers, International Monetary Fund*.
- Montenegro, G. F. (2013). Agroindustria y conflicto armado en el Meta palma de aceite en el municipio de Mapiripán (1997-2013). Bogotá: Repositorio Institucional - Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Trabajos de Grado Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.
- Núñez, M. P. (2012). ELN-FARC: ahora sí juntos. *Arcanos, Corporación Nuevo Arcoiris*, 60-75.
- Ocampo, S. (2009). Agroindustria y conflicto armado El caso de la palma de aceite. *ColombiaInternacional 70*, 169-190.
- Portes, A. (1998). SOCIAL CAPITAL: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 1-24.
- Puello, A. D. (2005). El conflicto Armado y el desplazamiento en Bolívar. En M. N. Bello, & M. I. Villa, *EL DESPLAZAMIENTO EN COLOMBIA*. (págs. 213-244). Medellín: Acnur.
- Putnam, R. D. (1993). The prosperous community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, 35-42.
- Rettberg, A., & Ortiz-Riomalo, J. F. (2016). Golden Opportunity, or a New Twist on the Resource–Conflict Relationship: Links Between the Drug Trade and Illegal Gold Mining in Colombia. *World Development*, 82-96.
- Ross, M. (2004). What Do We Know About Natural Resources and Civil War? *Journal of Peace Research*, 337-356.
- Rubio, M. (2002). Conflicto y Finanzas Publicas Municipales en Colombia. *CEDE*.
- Sanchez, F., & Diaz, A. m. (2005). Los Efectos del Conflicto Armado en el Desarrollo Social Colombiano, 1990-2002. *CEDE (Edición Electrónica)*.

- Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. *Academy of management Review*, 243-263.
- Staines, N. (2004). Economics Performance over the Conflict Cycle. En J. A. Clément, *Postconflict Economics in Sub-saharan Africa: Lessons from the Democratic Republic of Congo* (págs. 129-164). Washington D.C.: International Monetary Fund.
- Tenthoff, M. (2007). *Coca, petróleo y conflicto en territorio cofán. Informe de potlíticas de Drogas*. Informe de potlíticas de Drogas, (23).
- Toro, G. (2005). Eje Cafetero colombiano: compleja historia de caficultura, violencia y desplazamiento. *Ciencias Humanas*.
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life : Hindus and Muslims in India*. New Haven: Yale University Press. 2002.
- Zuluaga, J. (2009). Guerrilla, paramilitares y conflicto armado en Colombia. En F. E. Carrillo, *Las otras caras del poder. Territorio, conflicto y gestión pública en municipios colombianos* (págs. 45-96). Bogota: Fundación Foro Nacional por Colombia.

9. Anexos

Anexo 1: Muestra de Municipios

Región	Departamento	Municipio	Clasificación Cerac	Intensidad del conflicto	Tipo de conflicto
Orinoquía	Arauca	Arauca	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Meta	Villavicencio	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Meta	Puerto Gaitán	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Guaviare	San José del Guaviare	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido
	Casanare	Yopal	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
Pacífico	Chocó	Quibdó	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido
	Putumayo	Orito	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Putumayo	Puerto Leguizamó	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Nariño	Tumaco	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
Viejo Caldas	Caldas	Villamaría	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Quindío	Armenia	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Risaralda	Pereira	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
Tolima	Cundinamarca	Tocaima	Sin conflicto	baja intensidad	Sin conflicto

	Tolima	Ibagué	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Tolima	Natagaima	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
Córdoba-Sucre	Córdoba	Montería	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido
	Córdoba	Tierralta	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Córdoba	Moñitos	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Sucre	Morroa	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Sucre	Colosó	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
Antioquia	Antioquia	Medellín	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Antioquia	Dabeiba	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido
	Antioquia	Marinilla	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Antioquia	Tarso	Sin conflicto	baja intensidad	Sin conflicto
	Antioquia	Yondó	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido
Bogotá	Bogotá D.C	Bogotá, D.C.	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
Norte de	N. Santander	Cúcuta	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
Santander	N. Santander	El Carmen	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	N. Santander	Pamplona	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	N. Santander	Sardinata	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido

	N. Santander	Tibú	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
Santander	Santander	Bucaramanga	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Santander	Barrancabermeja	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Santander	Onzaga	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
Valle del Cauca	Valle del Cauca	Cali	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Valle del Cauca	Ginebra	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Valle del Cauca	Vijes	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
Atlántico-Bolívar	Atlántico	Barranquilla	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Bolívar	Cartagena	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Bolívar	Cantagallo	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Bolívar	María La Baja	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Bolívar	Santa Rosa del Sur	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Bolívar	Zambrano	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
Cesar-Guajira-	Cesar	Valledupar	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido
Magdalena	Cesar	Aguachica	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Guajira	Riohacha	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Magdalena	Santa Marta	conflicto interrumpido	alta intensidad	Fuertemente afectados e interrumpido

	Magdalena	Sitionuevo	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
Boyacá	Boyacá	Tunja	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Boyacá	Aquitania	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Boyacá	Cubará	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Cundinamarca	Susa	Sin conflicto	baja intensidad	Sin conflicto
Cauca- Huila	Cauca	Popayán	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Cauca	Suárez	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Cauca	Sotará	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido
	Huila	Neiva	Conflicto permanente	alta intensidad	Fuertemente afectados y persistente
	Huila	La Plata	conflicto interrumpido	baja intensidad	Levemente afectados e interrumpido

Anexo 2: Composición de la variable conflicto y estadísticas descriptivas

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
Conflicto overall	133.9655	205.2213	0	1180.775	N = 114
between		157.4963	11.63203	659.9773	n = 57
within		132.4017	-448.0733	716.0044	T = 2
Secuestros overall	63.37901	95.08288	0	532.1803	N = 114
between		61.82063	0	266.0901	n = 57
within		72.47609	-202.7111	329.4691	T = 2
Asesinos overall	33.40477	72.73592	0	470.3516	N = 114
between		54.00273	0	249.1724	n = 57
within		48.99007	-187.7745	254.584	T = 2
Masacres overall	3.548969	10.58833	0	97.31413	N = 114
between		7.091729	0	48.65707	n = 57
within		7.890826	-45.1081	52.20603	T = 2
Ataques overall	1.371965	5.398449	0	46.42526	N = 114
between		4.483309	0	30.68424	n = 57
within		3.036621	-14.36905	17.11298	T = 2
Atentados overall	.0868131	.4428092	0	4.033071	N = 114
between		.3107372	0	2.016536	n = 57
within		.316823	-1.929722	2.103349	T = 2
Muertos overall	1.405072	3.682171	0	18.08973	N = 114
between		2.76646	0	12.17547	n = 57
within		2.443933	-7.639791	10.44993	T = 2

Anexo 3: Estadísticas descriptivas de las variables Capital Social y Confianza Institucional

Variable		Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations	
KSocial	overall	14.03904	7.894282	-13.31657	27.76733	N =	114
	between		5.505756	-.302875	25.91692	n =	57
	within		5.681073	-4.111315	32.1894	T =	2
Confie	overall	33.60488	7.419882	16.0082	56.83463	N =	114
	between		5.403172	22.051	50.76703	n =	57
	within		5.11065	17.46569	49.74406	T =	2

Anexo 4: Estadísticas descriptivas de las variables instrumentales, Características municipales

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
Poblacin overall	354585.5	1014139	5286	7467804	N = 114
between		1017420	5406.5	7123248	n = 57
within		49953.53	10028.99	699142	T = 2
Distan~l overall	64.64297	83.42583	0	376.1182	N = 114
between		83.68885	0	376.1182	n = 57
within		4.245794	32.72883	96.55711	T = 2
PIBtot~l overall	3894421	1.34e+07	5925.46	1.06e+08	N = 114
between		1.32e+07	10344.83	9.78e+07	n = 57
within		2415666	-8157492	1.59e+07	T = 2
Invers~l overall	2.33e+08	7.56e+08	0	6.07e+09	N = 114
between		7.36e+08	1216241	5.13e+09	n = 57
within		1.87e+08	-7.03e+08	1.17e+09	T = 2
Pobreza overall	40.38545	21.17332	9.203009	89.47171	N = 114
between		21.26764	9.203009	89.47171	n = 57
within		0	40.38545	40.38545	T = 2

Anexo 5: Tabla de Correlaciones de las Variables estudiadas

	KSocial	Confie	Conflicto	PIBtotalmu~l	Invers~l	Poblacin	Pobreza	Distancia~l
KSocial	1.0000							
Confie	0.3326	1.0000						
Conflicto	0.2241	0.1646	1.0000					
PIBtotalmu~l	-0.0945	-0.0429	-0.1024	1.0000				
Inversinto~l	-0.1225	-0.0660	-0.1527	0.9444	1.0000			
Poblacin	-0.1087	-0.0628	-0.1657	0.9539	0.9679	1.0000		
Pobreza	0.3030	0.2155	0.3954	-0.3152	-0.3492	-0.3824	1.0000	
Distancia~l	0.0203	-0.0552	0.3028	-0.1975	-0.2172	-0.2449	0.3813	1.0000

Anexo 6: Test de Hausman

```
. hausman fixed random
```

	Coefficients		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
	(b) fixed	(B) random		
Conflicto	.0674058	.0160715	.0513343	.0920274
Confie	.0315654	.2807354	-.24917	.6154952

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtivreg
 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

```
chi2(2) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
          =          0.44
Prob>chi2 =          0.8021
```

Anexo 7: Regresión de MC2E

First-stage regressions

```

Number of obs   =          57
F(   3,       53) =          1.53
Prob > F        =          0.2184
R-squared       =          0.0795
Adj R-squared   =          0.0274
Root MSE       =        214.7067

```

Conflicto	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Confie	-4.558976	3.505878	-1.30	0.199	-11.59088	2.472925
Inversintotal	1.34e-07	1.05e-07	1.28	0.206	-7.64e-08	3.45e-07
PIBtotalmunicipal	2.19e-06	7.56e-06	0.29	0.774	-.000013	.0000174
_cons	-198.94	38.44354	-5.17	0.000	-276.0479	-121.832

Instrumental variables (2SLS) regression

```

Number of obs   =          57
Wald chi2(2)   =          2.14
Prob > chi2     =          0.3435
R-squared       =          .
Root MSE       =        10.301

```

KSOCIAL	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Conflicto	.0241601	.0257833	0.94	0.349	-.0263743	.0746945
Confie	.2730734	.1898492	1.44	0.150	-.0990242	.6451709
_cons	-.5303225	4.76745	-0.11	0.911	-9.874352	8.813707

Instrumented: Conflicto

Instruments: Confie Inversintotal PIBtotalmunicipal

.

Anexo 8: Regresión de Efectos Variables en dos Etapas

First-stage G2SLS regression

Number of obs = 114
 Wald chi(5) = 28
 Prob > chi2 = 0.0000

Conflictto	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Confie	2.925741	2.461323	1.19	0.235	-1.898363	7.749845
Pobreza	2.846167	.970955	2.93	0.003	.9431301	4.749204
Inversintotal	-8.09e-08	7.19e-08	-1.13	0.261	-2.22e-07	6.00e-08
PIBtotalmunicipal	4.83e-06	4.01e-06	1.20	0.229	-3.03e-06	.0000127
Distancialinealalacapitaldel	.4784553	.2326544	2.06	0.040	.0224609	.9344496
_cons	-110.4297	86.53877	-1.28	0.202	-280.0426	59.18316

G2SLS random-effects IV regression

Number of obs = 114

Group variable: E

Number of groups = 57

R-sq: within = 0.2275

Obs per group: min = 2

between = 0.0418

avg = 2.0

overall = 0.1136

max = 2

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Wald chi2(2) = 17.44

Prob > chi2 = 0.0002

KSocial	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Conflictto	.0172732	.0083496	2.07	0.039	.0009082	.0336382
Confie	.275266	.1047074	2.63	0.009	.0700432	.4804888
_cons	2.47475	3.360779	0.74	0.462	-4.112255	9.061756
sigma_u	0					
sigma_e	13.218744					
rho	0	(fraction of variance due to u_i)				

Instrumented: Conflictto

Instruments: Confie Pobreza Inversintotal PIBtotalmunicipal
 Distancialinealalacapitaldel

Anexo 9: Regresión de Efectos Fijos en dos Etapas

First-stage within regression

```

Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =    114
Group variable: E                      Number of groups =    57

R-sq:  within = 0.0717                 Obs per group: min =    2
      between = 0.0000                   avg =    2.0
      overall = 0.0088                  max =    2

                                         F(3,54)        =    1.39
corr(u_i, Xb) = -0.2914                Prob > F        =    0.2556
  
```

Conflicto	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Confie	6.297084	3.413859	1.84	0.071	-5.472913	13.14146
Pobreza	0	(omitted)				
Inversintotal	-7.91e-08	1.17e-07	-0.67	0.503	-3.15e-07	1.56e-07
PIBtotalmunicipal	7.63e-06	9.10e-06	0.84	0.406	-.0000106	.0000259
Distancialinealalacapitaldel	0	(omitted)				
_cons	-88.92625	121.9647	-0.73	0.469	-333.4508	155.5982
sigma_u	167.58329					
sigma_e	184.53504					
rho	.45196911	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(56, 54) = 1.38 Prob > F = 0.1192

```

Fixed-effects (within) IV regression  Number of obs   =    114
Group variable: E                    Number of groups =    57

R-sq:  within = .                      Obs per group: min =    2
      between = 0.0104                 avg =    2.0
      overall = 0.0501                 max =    2

                                         Wald chi2(2)    =    132.86
corr(u_i, Xb) = -0.6827                Prob > chi2     =    0.0000
  
```

KSocial	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
Conflicto	.0727599	.0830139	0.88	0.381	-.0899443	.2354641
Confie	-.0021002	.5758984	-0.00	0.997	-1.13084	1.12664
_cons	4.362296	10.46924	0.42	0.677	-16.15703	24.88163
sigma_u	12.19562					
sigma_e	13.218744					
rho	.45980746	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(56,55) = 0.34 Prob > F = 1.0000

```

Instrumented:  Conflicto
Instruments:  Confie Pobreza Inversintotal PIBtotalmunicipal
              Distancialinealalacapitaldel
  
```